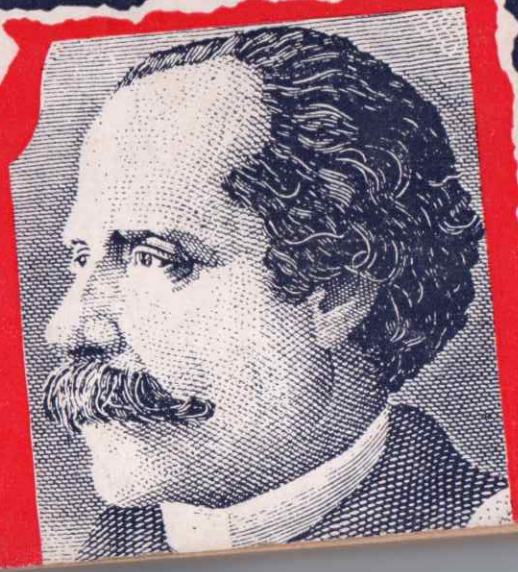
EL HEROE AUSENTE

Jorge Núñez Pinto



quimantú

LIBRERIA Solidaria

© 39707.
EMPRESA EDITORA NACIONAL QUIMANTU LIMITADA,
Av. Santa María 076, Casilla 10155, Santiago de Chile.
Primera edición, 1972.
Director División Editorial: Joaquín Gutiérrez M.
Jefe Departamento Ediciones Especiales: Alejandro Chelén R.
Proyectó la edición y diseñó la portada: Patricio de la O C.

Prólogo

Al igual que aquellas cimas que comienzan a aparecer a nuestra vista a medida que nos alejamos de la base de una montaña menor, las figuras históricas necesitan de la proyección temporal adecuada para ser reconocidas en su autenticidad. A veces son hitos iniciadores de una continuidad institucional y política; otras, simples islotes de soberbia o dignidad, a quienes se rinde culto desde la distancia, inofensivamente, con la seguridad de que ellos representan un ejemplo trascendente sólo para su época.

En nuestro país, y entre esos islotes que la Historia ha rescatado como una especie de símbolo discontinuo, está José Manuel Balmaceda, el Presidente mártir. No es aventurado decir que después de su caída una fisura aún no restablecida se produjo en el cuerpo y en el alma de la chilenidad. El representó la intervención del Estado en la enorme riqueza del salitre, rompiendo la doctrina en boga del librecambismo, que miraba como una acción desquiciadora el poder estatal, eufemismo surgido en la defensa del capital privado, interno o externo. Balmaceda intuyó de manera formidable que un país como el nuestro no podía vivir de una materia prima fundamental, por muy pródiga que ella fuera; para construir una nación moderna era necesario diversificar la infraestructura económica, creando

con los excedentes de las rentas salitreras la base industrial del Chile del futuro. Expresaba en la proclamación de su candidatura: ..."si el agricultor, el minero y el fabricante construyen útiles o sus máquinas de posible construcción chilena en las maestranzas del país; si ensanchamos y hacemos más variada la producción de materia prima, la elaboramos y transformamos en substancias y objetos útiles para la vida o la comodidad personal; si ennoblecemos el trabajo industrial aumentando los salarios en proporción a la mayor inteligencia de aplicación por la clase obrera; si el Estado, conservando el nivel de sus rentas y sus gastos, dedica una porción de sus riquezas a la protección de la industria nacional sosteniéndola y alimentándola en sus primeras pruebas; si hacemos concurrir al Estado con su capital y sus leyes económicas y concurrimos todos, individual y colectivamente, a producir más y consumir lo que producimos, una savia más fecunda circulará por el organismo industrial de la República y un mayor grado de riqueza y bienes nos dará posesión de este bien supremo de pueblo trabajador y honrado, vivir y vestirnos por nosotros mismos".

La savia nueva, que al decir del caudillo se formaría como un mecanismo natural a la aplicación de las normas mercantilistas, se deshizo en manos de los vencedores del 91, dirigidos por un coronel prusiano. Körner representaba una avanzada del recién formado Imperio Alemán, deseoso de incorporarse a la gran repartija colonial. La impudicia extranjerizante, tanto en la sujeción económica como en la espiritual, permitiría entronizarse en Chile a personajes como North y Körner.

La visión impecable de Balmaceda en torno de la independencia económica se frustró con su muerte, y allí, en la Embajada argentina, se rompió en el centro mismo del Estado democrático liberal la

pretensión de transformar a Chile en una auténtica nación.

Hoy en día, cuando la columna truncada de la gestión balmacedista es una verdadera voz que a nuestro costado nos llama al desafío para concretarla en el tiempo del ahora y del mañana, precisamente hoy, cuando el pueblo chileno vislumbra el encuentro con ese cauce que lleva a la sociedad más justa donde reinen la equidad y la auténtica convivencia, la presencia de Balmaceda debe surgir en su real contextura, saliendo de la calidad de icono e integrándose a la corriente vital de la patria.

He ahí la importancia de este libro del profesor Jorge Núñez Pinto, apasionado estudioso del estadista, ávido recolector de objetos y detalles historiográficos de la época; a su juventud, Jorge Núñez une la seriedad científica del investigador y la elegancia de un prosista de calidad. La política expansiva en el rubro editorial que el Gobierno de Chile ha impulsado y que tan bien representa "Quimantú", permitirá que miles de chilenos conozcan la exacta dimensión de José Manuel Balmaceda, ese hombre que en el instante previo de su muerte estampara con seguros trazos su testamento irrenunciable: "YO ESPERABA LIBRAR A MI PAÍS DE LA DOMINACIÓN ESTRANJERA. ME EMPEÑÉ POR HACERLO LA PRIMERA REPÚBLICA DE AMÉRICA".

Esas palabras finales confirman el origen de nuestros males y la perdurabilidad de su mensaje, cuajado de dramatismo histórico.

ARIEL PERALTA PIZARRO.

I

Don José Manuel Balmaceda y Fernández nació en el solar campesino de Bucalemu (provincia de Santiago), el 19 de julio de 1840. Su madre, doña Encarnación Fernández, pertenecía a la alta clase criolla. Manuel José Balmaceda, su padre, de clara ascendencia aristocrática, había heredado ricas posesiones agrícolas de don José Fernández de Balmaceda, fundador de la familia en el país.

Manuel José Balmaceda se singularizó por su espíritu de empresa e iniciativa, que lo convirtieron en un poderoso terrateniente y uno de los hombres más ricos de su tiempo. Curiosamente es señalado como autor del primer "código de trabajo" publicado en Chile. Este no es otro que el *Manual del Hacendado Chileno*, conjunto legal de centenares de obligaciones y reglas que regulan el trabajo de peones y empleados de hacienda. Es un valioso documento, sin duda, para conocer el grado de eficiencia que alcanzó la explotación del campesinado mestizo en los albores de la era republicana y que se prolongaría, sin variaciones, hasta nuestros días.

José Manuel —primogénito de la familia— inició sus estudios en el selecto Colegio de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Allí tuvo por compañero de aula a Manuel José Irarrázaval, fu-

turo caudillo del conservadurismo chileno y adversario acérrimo de su Gobierno.

Terminados sus estudios preliminares, se incorporó al Seminario Conciliar de Santiago, dirigido por los presbíteros Mariano Casanova y Joaquín Larraín Gandarillas, más tarde altos dignatarios de la Iglesia nacional.

Es muy probable que los consejos de sus tutores espirituales y las lecturas místicas —propias de la escolaridad de la época— hayan influido en el futuro mandatario, cuando anuncia a sus padres el deseo de continuar en el Seminario hasta ordenarse sacerdote. Pero su enérgico padre dispuso otra cosa.

A mediados de siglo, nubes de guerra y conquista ensombrecen el horizonte americano. España se ha impuesto un objetivo insólito: provocar un enfrentamiento armado con el Perú, con el doble fin de lograr reparaciones materiales y prestigio internacional. Como precaución ha ocupado las ricas islas Chinchas e intentado un ataque a las fortalezas del Callao.

El 24 de septiembre de 1864 anclaba en el principal puerto peruano la corbeta *Esmeralda*, llevando a su bordo al ex Presidente Manuel Montt, designado representante de Chile ante un Congreso Americano que apresuradamente había sido convocado, ante la amenaza española.

Don José Manuel Balmaceda fue nombrado secretario de la embajada a instancias de su padre, seguramente para alejarle de la vocación religiosa que manifestara en el Seminario. Aparentemente su cargo no tenía mayor significación..., pero el Gobierno chileno le enviaba en misión confidencial: junto al comandante Juan Williams Rebolledo, debía entregar un informe sobre la organización del Ejército y la Armada peruanos.

La personalidad de Montt pronto se impuso a los representantes americanos y, sobre todo, a los políticos peruanos, más preocupados en lograr la deposición del Presidente Pezet que en concertar acuerdos de alianza continental.

En 1865 la delegación chilena vuelve a Santiago..., pero la escuadra de Isabel II ha traído la guerra a nuestras costas, y Valparaíso es bombardeado impunemente el 31 de marzo de 1866.

Su primera actuación diplomática abre nuevos horizontes en la vida del ex seminarista. Desde entonces es figura familiar en el famoso Club de la Reforma, cuyos salones eran frecuentados por los Arteaga Alemparte, los Matta, los Gallo, José Victorino Lastarria, Eduardo de la Barra, Vicente Reyes, Miguel Cruchaga, y otros jóvenes empeñados en una transformación profunda de nuestra sociedad, aún dominada por la herencia colonial en sus hábitos políticos y sociales. Los "reformistas" planteaban un programa considerado "muy avanzado" para la época y, por lo mismo, duramente impugnado: libertad de prensa, reunión, asociación y enseñanza; representación de las minorías en el Congreso a través del voto acumulativo; incompatibilidad de la función parlamentaria con cualquier cargo público; independencia absoluta de los poderes públicos; descentralización administrativa y autonomía de las Municipalidades; extinción del fuero eclesiástico y separación de la Iglesia del Estado; redistribución de las cargas públicas; fomento de la Marina nacional y democratización de la Guardia Cívica.[1]

[1]Especie de "milicia ciudadana" instruida por oficialidad del Ejército. Fundada por Portales, desapareció a comienzos de este siglo, cuando se profesionalizan las Fuerzas Armadas.

La personalidad de Balmaceda logra destacar nítidamente por su elocuencia, intuición clara y convicción profunda. Sus discursos en el Club de la Reforma son una verdadera declaración de principios del liberalismo, que entonces representaba el ideario más progresista en el esquema político nacional. A propósito de las relaciones Iglesia-Estado, decía en una sesión del Club: "Si en Chile se debilita el sentimiento religioso y asoma su deforme cabeza la indiferencia que amortigua la fe y la virtud de la moral, es porque la generalidad de los ciudadanos se irrita contra el clero, a quien, lejos de ver en los hospitales, en la casa del pobre, en la práctica del bien, sólo lo ve en los salones de palacio, en la casa del opulento, en la ardiente lucha por los intereses políticos; y, haciendo una confusión lastimosa entre los ministros de la religión y la religión misma, da cabida en su corazón a esa indiferencia agostadora de los actos grandes y las grandes virtudes. Sepárese la Iglesia del Estado y la religión será en los ciudadanos la sola fe del alma para con Dios, como la política en la vida civil será la sola fe del deber cumplido para con la patria".

Elegido diputado en 1870, por el departamento de Carelmapu, ocupó las bancas opositoras al Presidente Federico Errázuriz. Su cargo fue, antes que nada, una tribuna magnífica para las ideas maduradas en las agitadas sesiones del Club de la Reforma.

En 1876 le fue ofrecido —por mediación de José Victorino Lastarria— el Ministerio de Hacienda, cargo que declinó por un deber de ética, ya que su actitud opositora le impedía formar en el Gabinete del Gobierno.

Una empresa agrícola fallida le tuvo al borde

de la ruina, a poco de iniciar su carrera parlamentaria. Su espíritu progresista lo llevó a emprender la construcción del famoso canal de Las Mercedes, que regaría y pondría en producción 12 mil hectáreas. Sin recursos suficientes y restringido en los créditos, se vio forzado a contraer deudas con intereses usurarios. La ayuda de un amigo personal —Enrique Salvador Sanfuentes— fue entonces providencial, aunque se vio obligado a vender la hacienda Nilahue, herencia de su padre.

El contraste no abatió su energía creadora, ni menos su afán de riqueza nacional..., pero la fría realidad financiera y bancaria, que se le revelara brutalmente, lo llevaría a proclamar, ya en la Presidencia, una reforma sustancial en materia crediticia, poniendo siempre el interés de la nación sobre las apetencias individuales.

1879. Días decisivos para Chile. Bolivia amenaza con el remate de las salitreras, desbaratando, con una argucia legal, el esfuerzo de capitales y obreros chilenos que desde hace años exploran y explotan el fabuloso "despoblado de Atacama". Una alianza secreta firmada con el Perú da a Bolivia la seguridad suficiente para actuar.

El sentimiento nacional clama por la guerra y nuestra Cancillería responde con una enérgica y categórica respuesta: tropas regulares —llevadas desde la Araucanía— ocupan Antofagasta el 14 de febrero de 1879, precipitando la declaración de guerra por parte del Gobierno boliviano.[2]

---

[2]La famosa marcha *Adiós al Séptimo de Línea* fue escrita por los suboficiales Gumersindo Ipinza y Luis Mansilla en circunstancias que su regimiento se trasladaba al norte. Su difusión es reciente, ya que durante el conflicto el himno popular era *A Lima*.

Sin embargo, una duda preocupa a La Moneda: ¿cuál será la actitud de la República Argentina?... Hace un año el enfrentamiento bélico era inminente e incluso naves chilenas habían incursionado en el Atlántico Sur.

La cuestión no es, pues, de simple simpatía u hostilidad. El vecino país considera pendiente la demarcación limítrofe en la Patagonia y Tierra del Fuego, y talvez sea ésta la ocasión para un arreglo ventajoso.

El Presidente Aníbal Pinto debe destacar, entonces, en Buenos Aires a un hombre inteligente, hábil y equilibrado, capaz de conseguir la neutralidad argentina y lograr el aplazamiento del diferendo: don José Manuel Balmaceda es nombrado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Chile ante los Gobiernos de la República Argentina, Uruguay y Brasil.

Luego de dilatadas gestiones, el ministro obtiene de la Administración Avellaneda la promesa de neutralidad y la postergación, por diez años, de un tratado definitivo. Sin novedad en su flanco oriental, Chile recobró la tranquilidad suficiente para obtener una victoria en el Pacífico.

La entrada a Lima —después de Chorrillos y Miraflores— corona la heroica jornada. Pero la euforia del momento olvida, por vez primera, al héroe ausente.

Terminada la guerra con la victoria inapelable de las armas chilenas, empezaba esa difícil etapa que es la liquidación de los acuerdos de paz.

Don Domingo Santa María inicia su administración el 18 de septiembre de 1881 y debe afrontar la responsabilidad de una paz justa y ventajosa para Chile. El nuevo mandatario llama a Balmaceda al

Ministerio de Relaciones Exteriores en circunstancias delicadas, ya que la diplomacia peruana tramaba la convocatoria de un Congreso Americano, en Panamá, para que éste decidiera la "legitimidad de la victoria chilena". A esto debían agregarse las odiosas reclamaciones presentadas por ciudadanos alemanes, italianos, ingleses y franceses ante los tribunales establecidos y que debían ser atendidas so pena de mayores conflictos.

Pero había otro peligro más serio aún. Estados Unidos declaraba abiertamente su deseo de intervenir en las negociaciones de paz, realizando una especie de "ensayo general" del agresivo imperialismo que tan desembozadamente practicará después. El general Hurbult, plenipotenciario norteamericano en Lima, había enviado al almirante Patricio Lynch un memorándum, en donde declaraba que cualquier cesión de territorio por el Perú "encontraría una decidida desaprobación de Estados Unidos". Dicho en otras palabras, se amenazaba con la intervención.

El canciller chileno pidió explicaciones a Washington y una amable nota del plenipotenciario norteamericano en Chile, general Kilpatrick, refutó las declaraciones de Hurbult.

La respuesta no se hizo esperar y en ella se establecía, con claridad meridiana, la política de guerra que ejercitaría el vencedor, y cuyo objetivo era la irrevocable decisión de anexar Tarapacá. El lenguaje viril y resuelto de nuestra Cancillería no dejaba dudas al respecto: "Provocado Chile a la guerra, confiscadas las propiedades de sus nacionales y arrojados inhumanamente de sus hogares, perturbadas sus industrias por los millares de brazos que las han abandonado, prefiriendo vindicar sus derechos y su honra; invertidas sumas cuantiosísimas en el sostenimiento de la contienda, derramada la sangre inapreciable de sus hijos, derrotado el enemigo y reducido en mar y en tierra a una im-

potencia radical y absoluta, llevaremos la guerra hasta donde sea menester para obligar al vencido a subscribir la paz; y, en el ajuste de la paz, iremos practicando nuestra soberanía hasta donde sea necesario para obtener la reparación debida a los males producidos por la guerra, la futura seguridad en la paz y en la permanente actividad de la República".

Entretanto el Secretario de Estado norteamericano, Mr. James A. Blaine, insistía en jugar a "la gran potencia" amparando al Perú, en la esperanza de "entrar" a su riqueza minera tras la paz que impondría a Chile. Para nadie era un misterio que se había reconocido a capitales norteamericanos una valiosa concesión de minas y un ferrocarril en el puerto de Chimbote. Este último serviría eventualmente como base de la marina yanqui para operar en el Pacífico Sur. Algunos miembros de la oligarquía peruana se inclinaban, lisa y llanamente, por el protectorado norteamericano.

Chile, entretanto, hizo apresar al Presidente peruano García Calderón y envió notas a las cancillerías europeas explicando su posición. Mr. Blaine juzgó oportuno mandar una misión especial a Santiago para poner fin al peligroso clima bélico que se respiraba en esos momentos. En diciembre de 1881 arribaban a Chile Walker Blaine, hijo, y Mr. William T. Trescot, con la tarea expresa de buscar una salida honorable para ambas potencias.

El ministro Trescot se entrevistó con don José Manuel Balmaceda en las conferencias llamadas de Viña del Mar. Esas conferencias demostraron la sagacidad del ministro chileno, que desconcertó en tal forma a su contendor que éste terminó ¡ofreciendo su mediación en el conflicto sobre las bases que Chile acordara!

El histórico protocolo de Viña del Mar —firmado al final de las conversaciones— señalaba solemnemente que Estados Unidos ofrecería sus buenos oficios siempre que las proposiciones de paz las dictara Chile.

Conjuntamente se iniciaban conversaciones con Bolivia para lograr un acuerdo sobre el territorio de Antofagasta. Reunidos en Arica los ministros de Chile, don Eusebio Lillo, y de Bolivia, señor Mariano Baptista, se acordó la cesión a perpetuidad del litoral boliviano, aunque nuestro país se comprometía a considerar una compensación cuando se lograra un criterio con el Perú sobre el territorio de Tacna.

El acuerdo pudo haber sido definitivo a no mediar las intrigas del embajador norteamericano en La Paz, Mr. Charles Adams, quien logró que el Gobierno boliviano no diese su aprobación a las gestiones del señor Baptista.

El intervencionismo de Mr. Blaine fue derrotado completamente y la conflagración debimos concluirla solos, imponiendo nuestra ley al enemigo vencido. No es exagerado afirmar que la última batalla de la Guerra del Pacífico se ganó en tierra nacional, por la inteligencia y patriotismo de un canciller visionario. El sacrificio de los "rotos-héroes" en Arica y La Concepción no fue vano.

Las gestiones diplomáticas de postguerra fueron seguidas con sumo interés por la opinión americana y europea. Quienes se admiraron ante el empuje y sacrificio derrochados en los campos de batalla, debieron reconocer que ello nada habría significado sin el juego brillante de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores.

El destino político del futuro Presidente estaba ya trazado... y sólo sería tronchado por el odio y la traición.

En mayo de 1882, don José Manuel Balmaceda se hizo cargo del Ministerio del Interior, en momentos de suma tensión. La discusión y aproba-

ción de las llamadas leyes laicas, promovida hace unos años por grupos liberales y reformistas, comenzaba en el ámbito del Congreso Nacional a propuesta del propio Gobierno.

A la aprobación de las leyes de Cementerio Común, Matrimonio, Registro Civil y Libertad de Conciencia no poco contribuyó la elocuencia y talento del ministro, defensor resuelto de las prerrogativas del Estado frente a la Iglesia.

El paso de Balmaceda por el Gabinete fue un ejemplo palpable de su dinamismo y energía realizadora: emprendió la construcción de ferrocarriles y telégrafos, puentes y oficinas de correos y hospitales; en su época se inició la exploración sistemática del desierto de Atacama, cuyas incalculables riquezas esperaban el brazo y la vocación pobladora de los chilenos; creó el ferrocarril estatal y toda su administración regular, y puede decirse que pocos ministros han creado más en tan corto tiempo, aparte de la labor legislativa misma.

Un clamor se elevaba de norte a sur del territorio: Balmaceda debía ser Presidente de la República.

En el salón del Hotel Central de Santiago se reunían, en la noche del 2 de enero de 1886, los delegados provinciales a la Convención Liberal-Independiente-Radical. Después de numerosas y tediosas votaciones se nominó a José Francisco Vergara como candidato a la primera magistratura. De inmediato ésta inicia conversaciones con los conservadores, cuyo apoyo se consideraba decisivo para las pretensiones de la candidatura Vergara. Sin embargo, las exigencias que plantean aquéllos significan la liquidación de las leyes laicas, defendidas ardorosamente por la combinación liberal.

La alianza liberal-radical-conservadora había fracasado y con ello las aspiraciones de José Francisco Vergara. Lejos de renunciar, éste declaró públicamente que llegaría "hasta el último minuto" de la contienda con quien quisiera acompañarle. No cumpliría su palabra.

El día 17 de enero, en el Teatro Odeón de Valparaíso, se inaugura la Convención Liberal, que en primera votación y en forma unánime proclama a don José Manuel Balmaceda candidato a la Presidencia.

Su discurso de agradecimiento importaba ya un capítulo de su programa de gobierno, y terminó así: "Mucho se ha descentralizado en los últimos años la acción y distribución de la riqueza nacional, aplicándola a la realización de obras útiles en todas las provincias y departamentos de Chile. Debe continuarse esta obra de reparación y justicia, pues juzgo por propia experiencia que la mayor, si no la sola, satisfacción que puede experimentar un hombre o un partido, es hacer el mayor bien posible, y que la mano bienhechora de la autoridad cubra el territorio de la República".

El día 25 de junio se efectuaron las elecciones de Electores de Presidente,[3] triunfando don José Manuel Balmaceda como candidato único, ya que José Francisco Vergara... había hecho pública su renuncia en vísperas de los comicios.

Proclamado Balmaceda como Presidente Electo en sesión del 30 de agosto por el Congreso Pleno, un grupo de sus partidarios le propuso una manifestación, que el ilustre político rechazó en carta pública donde explicaba su deseo de permanecer fiel a la confianza expresada por todos sus conciudadanos en las urnas, sin sectarismos ni exclusiones odiosas.

---

[3]Según la ley electoral de la época, los ciudadanos elegían a un número de electores y éstos —en segundo acto— al Presidente. Es el sistema de elección indirecta, aún vigente en algunos países.

II

Al ocupar la primera magistratura de la nación, Balmaceda tenía cuarenta y seis años de edad. Había casado con doña Emilia Toro Herrera y tenía varios hijos; uno de ellos —Pedro—, fallecido en plena juventud, es señalado como el favorito en los juegos y esparcimientos hogareños. Su muerte dejó una tristeza profunda e indisimulable en el espíritu sensible del ilustre mandatario.

La personalidad de Balmaceda es difícil de reconstruir, ya que los testimonios, casi siempre, están transitados por una apasionada admiración o una demencial odiosidad. Un retrato equilibrado, basado en "reminiscencias personales", es el que nos ha dejado el historiador Francisco Antonio Encina: "Alto y flexible, llevaba sobre hombros bien puestos una hermosa cabeza de espaciosa frente, orlada de cabellos castaños rizados, que siempre usó largos y que daban a su fisonomía aire de romántico y soñador. Su rostro muy pálido, de rasgos finos, surcado por venas salientes, reflejaba un temperamento nervioso y activo. Sus ojos, más bien pequeños, despedían miradas ardientes que, en contradicción con la melena, no reflejaban el ensueño sino el dinamismo. Jamás se fundían en una íntima comprensión; y mientras los modales acariciaban, algo indefinible, que partía de la mirada, retraía y ponía en guardia al interlocutor de alguna sensibi-

lidad cerebral. Las aletas movibles de su nariz, más bien alta, veladas por el espesor de los bigotes, la barbilla y un algo indefinible que persistía por largo tiempo en el observador perspicaz, reflejaban su carácter altivo, disimulado por los modales acogedores. Había en toda su persona distinción aristocrática".

Ricardo Salas Edwards, en cambio, anota otra característica notable del mandatario: "Pocos hombres públicos chilenos han poseído como él un don de gentes igual para conquistarse con más facilidad las simpatías de cuantos se le acercaban; sabía hablar a cada uno en su propio lenguaje, y puede decirse que sobre muchos de sus partidarios de la capital y de provincias, que le trataban personalmente, ejercía, con su figura, con sus modales y con sus amables palabras, una verdadera sugestión dominadora".[4]

El 18 de septiembre de 1886, en el Salón de Honor del Congreso, y ante las dos Cámaras reunidas, don José Manuel Balmaceda recibió la banda presidencial de manos del mandatario saliente, don Domingo Santa María. Este último solemnizó el acto diciendo: "Pongo en vuestras manos la banda tricolor, emblema del poder público entre nosotros. Me asiste el íntimo convencimiento de que he cumplido con mi deber, y tengo confianza en que mi digno sucesor, mediante la ayuda de Dios y las inspiraciones de su patriotismo, cumplirá también con el suyo".

Terminada esta sobria ceremonia, Balmaceda ocupó el centro de la mesa directiva y procedió a firmar el nombramiento de su primer Ministerio. Este quedó formado así: Eusebio Lillo como Ministro del Interior; Joaquín Godoy, de Relaciones Exteriores; Pedro Montt, de Justicia e Instrucción Pública; Agustín Edwards Ross, de Hacienda, y don Evaristo Sánchez Fontecilla, de Guerra y Marina.

[4]Ricardo Salas Edwards, *Balmaceda y el Parlamentarismo en Chile*. Imprenta Universo, Santiago, 1914.

El programa de gobierno contenía dos aspectos fundamentales, aunque ambos apuntaban a un solo objetivo: la grandeza nacional.

El primero, que comprometía un apoyo político amplio, perseguía la conciliación de "la gran familia liberal", eje de una futura base masiva, por sobre la ideología y las clases. El fin obvio era agrupar tras el programa a las mayorías nacionales, condición sin la cual nada grande y trascendente podía realizarse.

La idea de un Ejecutivo fuerte y por sobre los intereses partidarios parecía obsesionar a Balmaceda.

El segundo aspecto tendía a hacer de Chile una potencia industrial y militar en Hispanoamérica. Una simple reflexión bastaba para saber que el salitre había puesto en nuestras manos una riqueza extraordinaria, que no podía dilapidarse. Intuyó Balmaceda que el "oro blanco" era un bien pasajero, cuyo agotamiento era inevitable y que en cualquier momento la química podía hacerlo reemplazable. Sabia prevención.

Las rentas del salitre significaban para el mandatario una inversión gigantesca que no podía malgastarse en sueldos y gastos suntuarios; por el contrario, había que equipar al país con obras como puentes, caminos, hospitales, puertos, escuelas, capaces de sostener un cambio económico profundo, que rumbeaba a la nacionalización de la industria y el comercio, y la modernización de la agricultura.

Los primeros síntomas de cambio comenzaron a ser visibles en la administración pública. Hasta las altas funciones del Estado sólo aspiraban los grupos dirigentes de la capital y, en casos excepcionales, clientes políticos de la provincia. Balmaceda, a todo nivel, llevó gente de la clase media tradicional, cuyos méritos no eran el apellido o la herencia, sino la honradez y la inteligencia. La aristocracia santiaguina acuñó dos términos para designar a los recién llegados: "medio pelo" y "siútico".

A comienzos del año 1889, Balmaceda inició una gira a las provincias del norte, con el objeto de conocer directamente las perspectivas de la industria salitrera, recientemente incorporada a la economía nacional. En uno de sus discursos, pronunciado el 8 de marzo en Iquique, enunciaba, con claridad meridiana, la política que seguiría en el futuro: "La extracción y elaboración corresponde a la libre competencia de la industria. Mas la propiedad salitrera particular y la propiedad nacional son objeto de seria meditación y estudio.

"La propiedad particular es casi toda de extranjeros y se concentra activamente en individuos de una sola nacionalidad. Preferible sería que aquella propiedad fuese también de chilenos...

"Tampoco debe ser obra de particulares, ya sean éstos nacionales o extranjeros, porque no aceptaremos jamás la tiranía económica de muchos o de pocos. El Estado habrá de conservar siempre la propiedad salitrera suficiente para resguardar, con su influencia, la producción y su venta y frustrar en toda eventualidad la dictadura industrial de Tarapacá".

Los términos del citado discurso fueron amplia-

mente comentados en los círculos políticos y comerciales, ya que encerraban toda una síntesis de la acción nacionalista de Balmaceda.

Desde los albores de la República, operaban en Chile numerosos súbditos británicos que, enrolados en los ejércitos patriotas o en operaciones mercantiles, llegarían a tener gran preponderancia en los centros comerciales e industriales del país.

Valparaíso, asiento de una numerosa y próspera colonia inglesa, vio llegar el año 1866 a un modesto mecánico, que con diez libras esterlinas y un futuro incierto jugaría un papel importantísimo en nuestra economía. Era John Thomas North.

Su primer trabajo lo obtuvo North en el puerto de Caldera, en donde trabajó en la maestranza ferroviaria de esa ciudad. Sin embargo, su inquietud lo llevó a Tarapacá, tierra entonces propicia para aventureros y especuladores; desde su oficio de calderero pudo familiarizarse con la industria salitrera y presentir lo que ella significaba para quien luciera audacia y pocos escrúpulos. Iquique sería su próximo objetivo.

Su primera "empresa" comercial la montó North con Mauricio Jewell, entonces cónsul de Inglaterra en Iquique. Una modesta fábrica de ladrillos dio como fruto un pequeño capital y, sobre todo, útiles contactos con la rica colectividad inglesa residente.

Muy pronto encontraremos al ex mecánico dedicado a los juegos de la usura y la especulación; su campo de acción es, naturalmente, la propiedad salitrera, que él adquiere por compra de valores

(acciones) devaluados, y que luego revende por el triple de su valor a accionistas deseosos de participar de este nuevo El Dorado. Una campaña de prensa le abre las puertas de la sociedad chilena y los bancos le conceden el dinero que invertirá en enajenar nuestra propia riqueza.

Pero no sólo el salitre preocupó a North; más tarde controlará los ferrocarriles, la distribución de agua y las actividades bancarias de Tarapacá. Sus intereses se extendieron también a la zona del carbón, llegando a ser presidente de la Compañía Carbonífera de Arauco.

La trayectoria de John Thomas North es típica del capitalista moderno. El sistema ha creado al hombre y el hombre ha creado el sistema. Cuando vuelve en 1882 a Inglaterra, es uno de los mayores financistas del mundo y su influencia y fortuna son incalculables. Su biógrafo, J. Abel Rosales, dice en *El Coronel don Juan T. North*: "El maravilloso éxito que ha tenido en todos sus negocios el coronel don Juan T. North elevó a éste a una posición altísima en todos los círculos sociales. Es tenido actualmente como uno de los primeros financieros de Londres, posición esta muy difícil de obtener, mucho menos en un tiempo tan corto, cual es el que ha empezado a formar su reputación como millonario de certero cálculo.

"Príncipes, duques, condes, políticos y grandes industriales tienen relaciones con el coronel, y aun se sientan con él en la misma mesa".[5]

North es llamado por la prensa internacional El Rey del Salitre, aunque también maneja fuertes inversiones en la Huano Peruvian Corporation. A propósito de esto, se conoce una anécdota que no podemos dejar olvidada. Vuelto a su patria adquirió un castillo señorial donde acostumbraba pasar largas temporadas. Un día recibió allí la visita del pastor del condado, quien para halagarle le manifestó su complacencia porque había reemplazado en esa solemne morada a un vulgar fabricante de jabones. Ante tal servilismo, North reaccionó en forma violenta y le espetó esta frase al reverendo: "La base de mi fortuna fue la mierda".

[5]Citado por Hernán Ramírez N., *Balmaceda y la Contrarrevolución de 1891*. Editorial Universitaria, Santiago, 1958.

Los planteamientos del Presidente Balmaceda y las actividades del capital inglés sugerían un enfrentamiento, no sólo de voluntades, sino también de toda una política que iba a decidir el futuro de nuestro país. La disyuntiva conocía dos extremos: o Chile se convertía en una potencia industrial, utilizando las rentas del salitre, o quedaba como una factoría dependiente del capitalismo británico.

John T. North ejercitó una astucia sin precedente en nuestro medio, y ante la perspectiva nacionalista optó por asegurarse una "mayoría parlamentaria" que defendiera sus intereses a cambio de un puñado de libras esterlinas.

El soborno, encubierto o flagrante, fue el arma suprema que esgrimió El Rey del Salitre. Abogados, políticos y periodistas sirvieron con su elocuencia y su pluma a la antipatria, encarnada en la figura de un especulador inglés.

La tragedia nacional comenzaba animada por una oligarquía venal, refugiada en el juego parlamentario y la maraña legislativa.

Sin duda la figura más representativa de este siniestro período es Julio Zegers, líder del Partido Liberal y consejero de Estado. Abogado y representante legal de North en Chile, formó un equipo de "consejeros" y abogados al servicio de su mandante.

Zegers ejercitaba un método sutil y original para repartir el soborno y reclutar gestores: dirigía a sus colegas, en el foro o en el parlamento, una consulta cualquiera sobre asuntos que afectaban a su cliente. Recibida la respuesta, el consultado era obsequiado con un cheque como valor de ella, y pasaba a figurar como "abogado consultor" de North.

Don José M. Valdés Carrera, ministro de Balmaceda, publicó un folleto titulado *La Condenación del Ministerio Vicuña,* en donde dio a publicidad la lista de políticos que servían a North. Allí leemos:

"Abogado y apoderado general:

Don Julio Zegers.

Abogados llamados consultores:

Don Pedro Nolasco Préndez, don Eulogio Altamirano, don Adolfo Guerrero, don Ignacio Santa María, don Pedro Bannen, don Manuel A. Cristi, don Luis M. Rodríguez, don Bernardo Paredes, don Carlos Walker M., don Julio 2.º Zegers, don Ricardo Trumbull, don Enrique Mac-Iver, don Alberto Covarrubias."

Naturalmente ésta es sólo una fracción de los políticos corrompidos y "gente de influencia" que defendió ardorosamente los intereses salitreros.

El año 1897, un grupo de accionistas de la Compañía del Ferrocarril Salitrero pidió en Londres una severa investigación acerca de ciertas inversiones confidenciales que aparecían en la contabilidad de la empresa. Del juicio que se entabló en los tribunales británicos quedó en claro la existencia de lo que entonces se llamó el Fondo de Soborno y Corrupción de los Ferrocarriles Salitreros, cuyas páginas confirmaron ampliamente lo afirmado por José M. Valdés Carrera.

Incluso políticos como Enrique Mac-Iver no hacían misterio de su investidura parlamentaria, como lo revela el siguiente documento comercial:

"Y por cuanto por dicho convenio de 5 de enero de 1889 fue proveído igualmente que el citado John Harrington prepararía y presentaría un buen título de los terrenos, depósitos y demás bienes que se convino vender libre de todo impedimento, bajo las leyes de la República de Chile, o tales otras leyes que fueron aplicadas al caso, a la satisfacción del señor don Enrique Mac-Iver, diputado al Congreso."[6]

El fondo de soborno sirvió de generosa fuente de entrada a numerosos periodistas, que cotidianamente prepararon a la opinión pública para la contrarrevolución. Más de alguno llegó al extremo de comparar al mandatario con los payasos más famosos del momento.

Zorobabel Rodríguez recibía una subvención anual de treinta y seis mil pesos por sus artículos en *El Independiente* (¡vaya nombre!); Máximo R. Lira, secretario de un Ministerio (por lo tanto funcionario del Ejecutivo), era columnista de *Los Debates* y también a sueldo de Zegers; Carlos Rogers, Abraham Guerrero, Isidoro Errázuriz y Gonzalo Bulnes fueron otros tantos nombres que figuraron junto a los prohombres de la oligarquía en su infame tarea de liquidar el camino de liberación abierto por Balmaceda.

Al parecer, North juzgaba a nuestros políticos por aquellos que estaban a su servicio, lo que

---

[6]Hernán Ramírez N., op. cit., pág 78.

explica su atrevimiento cuando envió al Presidente Balmaceda un potro de raza y el cabrestante que había pertenecido a la *Esmeralda*. El mandatario comprendió las intenciones del financista y declinó recibir los obsequios; el cabrestante lo remitió a la Comandancia de Marina[7] y el potro fue donado a la Escuela de Agricultura de la Quinta Normal.

A comienzos del año 1890 la opinión, especialmente liberal y conservadora, era francamente hostil al Ejecutivo; tanto su prensa como sus tribunos trataban de crear un artificial "conflicto de poderes" entre el Congreso y el Presidente.

Hasta nuestros días la Historia "oficial" y el manual escolar han repetido rutinariamente esa interpretación, acuñada por la oligarquía, que oculta, falazmente, la verdadera causa del conflicto. La "élite parlamentaria", vocera del latifundio y la banca, en alianza con el imperialismo británico, emprendieron la tarea de liquidar en germen el proceso revolucionario-nacionalista que impulsaba el balmacedato. La guerra civil sería el último acto de la tragedia, cerrada con el sacrificio de 10 mil vidas y la restauración definitiva del capital extranjero en nuestro suelo.

La apertura del Congreso, ese año, se efectuó en un ambiente lleno de inquietud y amenazas. El 1.º de junio se ordenó el acuartelamiento de la guarnición militar y la policía de Santiago, ante la posibilidad (más bien certeza) de disturbios opositores.

---

[7]Actualmente en la Escuela Naval Arturo Prat.

El Presidente y su Gabinete llegaron hasta el Congreso escoltados por la juventud del Club Liberal Gobiernista. La mesa directiva la ocupaban —junto a Balmaceda— Vicente Reyes, presidente del Senado; Ramón Barros Luco, presidente de la Cámara de Diputados, y los secretarios, Francisco Carvallo Elizalde y Máximo R. Lira.

Los partidos de oposición, en una actitud sin precedente, no concurrieron a la sesión.

Refiriéndose a las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, decía entonces el primer mandatario: "El pretendido gobierno parlamentario en la República tiende inevitablemente a la dictadura del Congreso; así como el gobierno unitario centralizado y con influencias poderosas, para vigorizar el principio de autoridad, tiende a la consagración de la dictadura legal".

La declaración final tenía un tono conciliador que trataba de restar importancia al enfrentamiento que buscaba la oposición: "Yo no acepto para mi patria la dictadura del Congreso, ni sostengo la dictadura del Poder Ejecutivo; quiero un régimen de libertad y de independencia de los poderes públicos, en el cual cada uno de ellos pueda ejercer la plenitud de las atribuciones necesarias para sus fines propios, pero sin invadir jamás los derechos del pueblo, ni la esfera de la acción trazada legalmente a la actividad de los otros poderes".

A pesar de los esfuerzos presidenciales en busca de una transacción, la oligarquía congresista insistía en el obstruccionismo torpe e infecundo. Balmaceda procedía a nombrar un Ministerio y a las veinticuatro horas era recibido por una rechifla pública hábilmente preparada por la "gente bien" de la capital (Ministerio Ibáñez); uno tras otro se sucedían los mítines... en que solemnes

caballeros preludiaban un oscuro panorama ante la inminencia de una eventual "dictadura presidencial". El Teatro Santiago fue escenario del más violento de ellos, ya que sus conclusiones fueron entregadas al mandatario, dando lugar a una histórica escena en La Moneda.

El acto público estuvo presidido por el patriarca conservador Rafael Larraín Moxó, actuando como secretarios Ismael Valdés Vergara y Carlos Concha Subercaseaux. Los oradores fueron Abdón Cifuentes, Ismael Tocornal, Diego Barros Arana y Antonio Subercaseaux.

Las "conclusiones" fueron entregadas a una comisión que las debía poner inmediatamente en conocimiento del Presidente. La delegación estaba compuesta por Alejandro Vial, ex Ministro de Hacienda del Presidente Manuel Montt; José Ciriaco Valenzuela, jefe conservador; Francisco Puelma, dueño de minas, latifundista del sur y magnate salitrero en Antofagasta; Federico Varela, millonario, miembro del Partido Radical, amigo de Rubén Darío, el poeta nicaragüense, que le dedicó su obra *Azul;* Matías Ovalle, ex intendente de la provincia, y dos vecinos de la ciudad, Ladislao Larraín y Manuel Zamora.

Recibidos por el Presidente, Alejandro Vial puso en sus manos el documento que fue leído, en seguida, por José Miguel Valdés Carrera. Decía éste en una de sus partes: "Producido el conflicto entre el Congreso y el Ministerio, que ha tomado las proporciones que conocéis, sólo un camino se presenta abierto para volver a nuestra sólida y bien cimentada paz pública, y ese camino está en vuestras manos, Excmo. Señor, porque la Constitución os ha colocado en el puesto de un sereno moderador de los choques que produce la contienda de opiniones en la inevitable lucha de partidos".

Balmaceda contestó en una brillante improvisación: "Pensad, señores, en que soy chileno y que

derivo mi mandato no del Congreso sino del pueblo; que soy el jefe del Gobierno en el interior y representante de la dignidad y del prestigio de Chile en el exterior. En este puesto soy más que un individuo, porque soy el representante de uno de los poderes fundamentales del Estado. No puedo abatir mi autoridad, ni doblegar el ejercicio de mis atribuciones constitucionales y exclusivamente propias ante el Poder Legislativo tratándose de la elección de mis secretarios de confianza y asumiendo la responsabilidad de mis propios actos. ¿Cuál sería la situación del Presidente de Chile si en estas condiciones cediera en el ejercicio de sus prerrogativas constitucionales?"

La pregunta fue contestada por Francisco Puelma, empleando las mismas palabras que habían decidido la abdicación impuesta a O'Higgins: "Sería el hombre más grande de Chile".

Ante tan insólita e imprudente interrupción, Balmaceda exclamó: "Permítame el señor Puelma, yo no puedo abrir discusión". Pero ante la insistencia majadera en la abdicación, el mandatario mantuvo la dignidad y la ética que correspondía, agregando: "Sois sin duda personas tranquilas y muy respetables; pero, dispensadme, son más respetables para mí los miembros de la mayoría del Congreso. Y si ante ellos he creído que debía mantener la plenitud de mis atribuciones, no habré de inclinarme ante vosotros... Se ha invocado en mi presencia el recuerdo de la abdicación de O'Higgins. Era aquélla una época de revolución y anarquía. Nosotros nos encontramos en presencia de una situación regular en la cual ejercito mis atribuciones constitucionales. Nadie tiene el derecho de exigirme el sacrificio de mis prerrogativas como Jefe de Estado en Chile. Os lo declaro con toda convicción, no abatiré mis atribuciones, no haré en caso alguno el papel de víctima porque el Jefe de Estado que a esto

se prestare victimaría a la nación que manda y representa. Hemos concluido".

El ambiente político, ya cargado de presagios, sirvió de marco al único conflicto social que debió afrontar en su gobierno el Presidente Balmaceda.

Un telegrama fechado en Iquique anunciaba la huelga declarada en ese puerto por el gremio de jornaleros portuarios. El motivo del movimiento hoy nos parecería insignificante, pero, dadas las condiciones de la época, tenía una importancia grande para los afectados. Se pedía el pago de los jornales en moneda de plata o en billetes, al cambio fijado para los derechos de aduana. A la comunicación en que industriales y comerciantes le prevenían de lo peligroso de la situación, Balmaceda contestó: "Deseo que ustedes digan cuáles son las exigencias de los huelguistas y qué pasos han dado ustedes para una inteligencia razonable y equitativa con los trabajadores".

La respuesta no llegaría jamás a La Moneda.

Mientras tanto en el norte la intransigencia y la desidia comenzaban a dar amargos frutos: turbas incontrolables saqueaban los almacenes eludiendo la acción de las tropas regulares, escasas e inexpertas en esta clase de desmanes. El intendente pretendió conciliar para evitar males mayores, pero la raíz del conflicto iba más allá de los simples enfrentamientos callejeros. La huelga se propagó a las oficinas salitreras de San Donato, Ramírez y Tres Marías; luego recibirían la solidaridad de Sacramento, Constancia, San José, Peña Chica, Cruz de Zapiga, La Palma, Compañía, Colo Colo, Mercedes y Rosario. El vasto apoyo tenía una explicación simple: los obreros de la pampa recibían sus pagos en fichas acuñadas por las empresas, válidas sólo en el sitio de trabajo; por lo tanto, se obligaba a los trabajadores a comprar en "pulperías" que —¡naturalmente!— administraban los patrones.

Sólo después de una semana se logró controlar la situación con las tropas llegadas desde el sur. La huelga estalló, sin embargo, en Antofagasta, Pisagua y Arica.

Al amanecer del 21 de julio se iniciaba un movimiento similar en Valparaíso, encabezado por lancheros y estibadores de la bahía. Las exigencias eran las mismas de los trabajadores nortinos, y pronto se sumaron los aduaneros, obreros del muelle y de los almacenes de resguardo. A las 11 A. M. se convocó a una manifestación masiva frente a la Intendencia, y a pesar del acuerdo inminente elementos de los suburbios incitaron al saqueo y al pillaje. La imprenta del diario *La Unión* fue apedreada durante varias horas.

El Gobierno envió apresuradamente tropas al mando del general Samuel Valdivieso; los desmanes continuaron toda la noche y oficialmente se comunicó que había 12 muertos y 500 heridos, ya que se emplearon exclusivamente los sables y las cargas intimidatorias de caballería.

La investigación sumaria iniciada a raíz de los sucesos de Valparaíso llevó al Comandante General de Marina, Juan Williams Rebolledo, a pedir la renuncia del capitán de puerto, Jorge Montt, por su sospechosa negligencia ante los desórdenes referidos.

Pocos meses más tarde Montt encabezaría la sublevación de la Armada contra Balmaceda.

La minoría congresista continuaba sembrando la angustia y el caos institucional. En sesión celebrada el 12 de junio de 1890, el diputado Julio Zegers, convertido ya en enemigo odioso del Presidente, presentó un proyecto que aplazaba el cobro de contribuciones, lo que significaba dejar al Ejecutivo sin fondos para atender la administra-

ción pública y los pagos de deudas contraídas con bancos y empresas comerciales. La indicación de Zegers fue aprobada en forma abrumadora.

Cuatro días más tarde, en sesión del Senado, Joaquín Rodríguez Rozas presentaba otra moción que, en cierto modo, complementaba la anterior. El texto decía: "El Senado acuerda someter a examen el proyecto de ley de presupuesto con el propósito de discutirlo cuando haya un Ministerio que tenga la confianza del Congreso". La argucia legal permitía aplazar indefinidamente el despacho de la ley de presupuesto y de hecho era chantaje permanente al Ejecutivo, pues obligaba a éste a nombrar ministros "congresistas". La aprobación fue casi unánime: sólo cinco votos en contra.

Un hecho de singular importancia vino a enriquecer el esquema ideológico de la época: el nacimiento del primer partido de base netamente popular.

El 20 de noviembre de 1887 un grupo de intelectuales y artesanos fundaban en la Filarmónica de Obreros el Partido Demócrata, bajo la convocatoria de los jóvenes abogados Malaquías Concha y Avelino Contardo.

La actual prensa obrera tiene también sus precursores en los periódicos que, a costa de grandes sacrificios, proclamaban la justicia social y la reivindicación del proletariado, puntos principales en el programa de la nueva entidad. En Santiago se publicaba *La Igualdad*, dirigida por Contardo, y *La Democracia*, animada por Juan Rafael Allende; en Valparaíso *La Voz de la Democracia* mantenía el clamor demócrata en la pluma de Francisco Gallegüillos Lorca.

Cuando se producen graves disturbios en la Alameda, a causa de las tarifas que imponía el Ferrocarril Urbano, el Partido Demócrata es arrastrado a los tribunales y sus jefes señalados arbitrariamente como instigadores del movimiento. Una simple investigación comprobó lo falso de las acusaciones y el oportunismo de las querellas.

A propósito de esto último, el nuevo partido convocó a un mitin que se celebró junto a la estatua de San Martín, en la Alameda. Miles de afiliados escucharon la palabra sincera y encendida de Antonio Poupin, Avelino Contardo, Pío Cabrera y Malaquías Concha.

El objetivo central de la asamblea era pedir la derogación de la ordenanza de reuniones públicas y lograr el término del conflicto entre el Ejecutivo y la élite congresista. Al final de ella se acordó hacer conocer estas inquietudes al Presidente Balmaceda. La respuesta de éste fue clara y firme, prometiendo revocar la ordenanza que limitaba el derecho de reunión y dando serenas explicaciones sobre su actuación pública; terminó con estas palabras: "Se ha roto todo vínculo de unión con el Poder Ejecutivo y se pretende el predominio parlamentario, que en estos momentos traería el predominio de círculos políticos sin raíces en el corazón del pueblo.

"Atenderé siempre y con especial solicitud los intereses del pueblo. A él debo principalmente el alto puesto de honor que desempeño. No puedo olvidar que éste era el reproche que hace un tiempo hicieron las clases opulentas de la capital.

"Por deber y gratitud haré, cualquiera que sea el desarrollo de los sucesos, cuanto de mí dependa para que el pueblo no sufra y para asegurarle en todo momento su tranquilidad, su trabajo y bienestar".

La ruptura entre Balmaceda y la oligarquía parlamentaria era ya evidente. En circunstancias tales, el arzobispo de Santiago, Mariano Casanova, ofreció su mediación, que fue recibida con entusiasmo por el Ejecutivo, aún empeñado en lograr una precaria e inútil armonía. El ex Ministro de Relaciones Exteriores Alvaro Covarrubias fue elegido para formar un nuevo Gabinete, ya que su independencia garantizaba cualquier gestión conciliatoria. Por desgracia el político hizo exigencias inaceptables y nuevamente se fracasó en la búsqueda de una pacificación.

El Presidente encontró un resorte legal adecuado al momento: el día 14 de octubre de 1890 procedió a clausurar las sesiones del Congreso. Sin embargo, la propia minoría parlamentaria, en uso del reglamento constitucional, convocó a la Comisión Conservadora.[8] Este organismo aprobó una indicación de Carlos Walker Martínez, que permitía la asistencia a sesiones de diputados y senadores. De hecho el Congreso estaba nuevamente en funciones, burlando la decisión del Ejecutivo.

El 7 de noviembre la Comisión Conservadora envió una nota al Presidente, pidiendo la reanudación de las labores parlamentarias. Balmaceda contestó en enérgicos términos que "persistiendo las causas de la clausura, no era el momento de convocarlo".

El objetivo tan largamente perseguido por la oligarquía se había alcanzado. Ahora se buscaría el instrumento adecuado para derrocar al mandatario.

A fines de 1890 la oposición había descartado todos los medios legales para provocar una solu-

[8]Especie de Cámara colegiada que entraba en funciones cuando el Congreso estaba en receso, entre dos períodos ordinarios de sesiones.

ción de fuerza. El cuartelazo o la guerra civil aparecía como única alternativa.

Desde comienzos del año los altos mandos de la Armada fueron visitados por personeros conservadores y liberales, que hábilmente consiguieron la lealtad a un golpe militar que contaría con la adhesión de una parte considerable del Ejército.

A través de agentes confidenciales o vínculos familiares, se realizaba una paciente labor de proselitismo en los cuarteles del Ejército y la Milicia Nacional. La conspiración contaba con el general Gregorio Urrutia, los coroneles Estanislao del Canto y Adolfo Holley; con varios mandos medios como tenientes coroneles, sargentos mayores y oficiales de menor graduación.

La reacción ante la conspiración del silencio no se hizo esperar: Del Canto fue enviado a Tacna y Holley a Antofagasta, por previsión del Comandante General de Armas de Santiago, general Orozimbo Barbosa. Los oficiales sospechosos eran vigilados estrechamente y muchos de ellos enviados a la reserva en carácter de "disponibles".

Los jefes, oficiales y soldados recibieron una anónima cartilla de "deberes cívicos", que explicaba lo absurdo de su obediencia al poder constituido, lo que significaba en el fondo un llamado a la sedición. Los regimientos de la capital, y algunos de provincia, permanecían acuartelados ante una posible intentona opositora. El 11 de noviembre llegaba a Chile el general Manuel Baquedano, desde Europa, siendo recibido con una apoteósica manifestación pública.

El día 19, el héroe de la Guerra del Pacífico recibía una esquela que le invitaba a un banquete público de "homenaje y simpatía". Tan oportuna invitación estaba firmada por Agustín Edwards Ross, Alvaro Covarrubias, Ambrosio Rodríguez Ojeda, Belisario Prats, Carlos Walker Martínez, Demetrio Lastarria, Diego Barros Arana, Domingo

Fernández Concha, Domingo Toro Herrera, Eduardo Matte, Enrique Mac-Iver, Eulogio Altamirano, Francisco Puelma, José Besa, Jovino Novoa, Manuel José Irarrázaval, Pedro Montt, Ramón Barros Luco, Carlos Lira, Vicente Reyes y Federico Errázuriz Echaurren, todos figuras prominentes de la aristocracia santiaguina.

El general Baquedano aceptó la invitación, "considerándola ofrecida a la Armada, al Ejército y a la Guardia Nacional, que hicieron la campaña de la última guerra con tanta gloria para el nombre y las instituciones de la República".

Los organizadores esperaban la concurrencia masiva de los altos oficiales de la guarnición, que, manifestando su admiración al héroe, garantizarían su fidelidad cuando fuese necesario. Pero las autoridades reaccionaron enviando una copia de la circular del ministro Errázuriz, que prohibía la asistencia de uniformados a los actos políticos.

El asunto tenía un finalidad muy fácil de suponer: Baquedano había sido elegido como jefe de un cuartelazo que debía estallar el 1.º de enero de 1891, ya que desde ese día Balmaceda gobernaría sin los presupuestos que el Congreso debía aprobar antes de finalizar el año. Baquedano se presentaría en los cuarteles acompañado por los generales Marco Aurelio Arriagada, Luis Arteaga, Gregorio Urrutia, Alejandro Gorostiaga, además de Emilio Sotomayor, Cornelio Saavedra y Marcos Maturana, estos últimos tres en condición de retiro.

Formados los batallones en el patio del cuartel, alguno de la comitiva gritaría: "Viva el general Baquedano", para dejar en seguida la palabra al militar, quien pediría un sacrificio a fin de "salvaguardar la Constitución y las leyes, pisoteadas por la dictadura".

El plan parecía perfecto, pero, según algunos ensayistas, Baquedano exigió por lo menos dos divisiones del Ejército para acaudillar el golpe. Aun-

que se le aseguró la sublevación de la escuadra, Baquedano desistió al no contar con el suficiente apoyo de las tropas. El general temía un desenlace sangriento, que después —paradojalmente— trataría de evitar por todos los medios sirviendo de mediador hasta las postrimerías de la contienda civil.

Un hecho de carácter policial, aprovechado astutamente por el antibalmacedismo, cerró la cadena de violencia alentada metódicamente por la oligarquía. Los últimos meses presagiaban la tragedia nacional. Numerosos atentados terroristas, sublevaciones de tropas e incluso un demencial asalto frustrado a La Moneda, planeado por Enrique Valdés Vergara, con el fin de apresar a Balmaceda, sirvieron para demostrar hasta dónde estaba dispuesta a llegar la reacción.

La inauguración de un club conservador en Santiago dio lugar a una refriega en que hubo numerosos detenidos, entre ellos el joven Isidro Ossa Vicuña, quien cometió la imprudencia de huir cuando se le trasladaba al cuartel de policía. Un disparo detuvo su fuga y minutos más tarde fallecía en su hogar.

La muerte del estudiante daría lugar a una nueva ofensiva de la oposición, quien echó mano de todos los recursos teatrales para explotar políticamente la desgracia y exaltar el sentimentalismo público. Ricardo Cox Méndez, en sus *Recuerdos de 1891*, lo consigna así: "... el ataúd no fue colocado en un carro fúnebre de la Beneficencia o de alguna otra empresa de pompas fúnebres. Se deseaba que el féretro, que contenía los restos de 'la primera víctima de la tiranía', como se dijo, fuera visto por todos los habitantes de la ciudad si fuera así posible; para eso se acomodó, enlutándola previa-

mente, una simple 'golondrina' de carga, que por ser enteramente plana y descubierta permitiría que el ataúd quedara a la vista.

"Isidro Ossa tenía un amigo íntimo, un compañero inseparable... Alguien, no sé quién, tuvo la idea de asociar a este amigo, de un modo especial, público, y aun espectacular, a los funerales de Isidro Ossa. Para este objeto se puso sobre la 'golondrina' enlutada y al lado de la cabecera del ataúd un asiento, también enlutado y, es de suponer, suficientemente asegurado.

"Cuando, terminados los responsos, el público comenzó a salir de la iglesia, y veía sobre la improvisada y enlutada carroza fúnebre una silla vacía, también enlutada y colocada al lado del ataúd, no podía menos de preguntarse: ¿qué significa esto?

"Organizado el cortejo, y antes de ponerse en marcha, se esclareció para todos el problema: la silla vacía fue ocupada por el amigo del alma de Isidro Ossa Vicuña, vestido de riguroso luto.

"Tres horas se demoró el cortejo en llegar desde la iglesia de San Ignacio hasta el Cementerio Católico, donde la familia Ossa Vicuña tenía su tumba. Durante esas tres horas, a través de la ciudad entera y ante los ojos de centenares de miles de personas, fue exhibido este cuadro de la amistad doliente".[9]

El discurso de Eulogio Altamirano en el camposanto llamó abiertamente a la rebelión. El Club de la Unión expulsó a los ministros Vicuña, Godoy, Pérez Montt, Gana, Valdés Carrera y Mackenna como represalia, ya que se aludió a su conducta pública como causal de la medida.

[9]Ricardo Cox M., *Recuerdos de 1891*, pág. 63. Imprenta Nascimento, Santiago, 1944.

Mientras tanto la élite parlamentaria había resuelto no despachar los presupuestos para el año 1891, dejando al Ejecutivo sin poder solventar los gastos públicos. Era ése el último recurso para doblegar al Presidente. Si esto no era factible, se le arrastraría a una confrontación bélica que parecía inevitable y que secretamente se preparaba desde mediados de año. Tal es el testimonio del citado Ricardo Cox Méndez: "... Desde el mes de agosto de 1890... yo me había puesto a las órdenes de cierto comité que funcionaba en una casa de la calle de Agustinas".[10]

En la tarde del 28 de diciembre, en casa de Abdón Cifuentes se reunían Manuel José Irarrázaval, líder conservador; Manuel Recabarren, senador radical; Zorobabel Rodríguez, Carlos Walker Martínez y Ventura Blanco Viel; la finalidad de la cita no podía ser más insólita: redactar un acta por la cual se deponía de su alto cargo al Presidente Balmaceda.

En los días siguientes se buscó infructuosamente al general Baquedano para que firmase el documento. No obstante sus simpatías por el paso dado, el militar se negó a comprometerse y pidió se dejase pendiente el nombre del jefe uniformado que encabezaría la sublevación.

Los primeros en firmar el Acta de Deposición fueron José Besa y Manuel José Irarrázaval. Por indicación del primero se hizo un solemne juramento acerca del secreto que debía guardarse, y, más aún, el resto de los conjurados estampó su firma sin conocer el contenido del documento, como medida de precaución ante posibles indiscreciones. A con-

[10]Ricardo Cox M., op. cit., pág 68

tinuación firmaron Melchor Concha y Toro, José Antonio Gandarillas, Luis Pereira, Pedro Nolasco Marcoleta, el vicepresidente del Senado, Waldo Silva, y los diputados Ramón Barros Luco, presidente de la Cámara; Ladislao Errázuriz, David Mac-Iver, Pedro Montt y Joaquín Walker Martínez.

Una de las copias del acta fue llevada a Vicente Reyes, presidente del Senado, para que adhiriera a la conjura. La negativa del personero fue rotunda ante la perspectiva de un conflicto que se preveía largo y sangriento. De allí su ausencia en los acontecimientos posteriores.

El 1.º de enero de 1891, Chile no tenía presupuesto por obra y gracia de un Congreso, instrumento dócil de una minoría, privilegiada y oscura, empeñada en frenar el esfuerzo gigantesco y patriótico del Presidente Balmaceda.

El balmacedato importaba la quiebra de la sociedad semicolonial, constituida por una minoría poseedora del poder económico y político, y una mayoría semianalfabeta, condenada en su miseria al arado de madera y al combo de fierro, sin esperanza de un mañana mejor.

El capitalismo inglés, dispuesto a convertir en colonia a la mitad del mundo, no miraría con indiferencia la lucha fratricida que se aproximaba; por el contrario, la bandera "congresista" levantada por la reacción chilena fue saludada entusiastamente por el coronel North y su Gobierno. Terminada la guerra civil el poder inglés quedaría soberano en nuestro salitre: Tarapacá se convirtió en una "factoría extranjera"..., tal como lo previó el Presidente Balmaceda.

Al iniciarse el nuevo año, el Ejecutivo dirigió un Manifiesto al amanecer del aciago día, explicando su actitud y la del Congreso. En uno de sus pá-

rrafos decía: "Los Presidentes desde 1833 han gobernado a la República durante años, meses o días, pero siempre por algún tiempo, sin la ley de presupuestos y sin la que fijaba las fuerzas de mar y tierra, no existiendo, desde entonces, más que una sola excepción a esta regla.

"No ha cumplido la mayoría del Congreso ni ha tenido la voluntad de cumplir el deber constitucional de aprobar las leyes de presupuestos y de las fuerzas de mar y tierra".

El golpe congresista perseguía crear esta situación para después, cínicamente, acusar al Presidente de "dictador", como se desprende de la mencionada Acta de Deposición:... "El Presidente... había desconocido por medio de sus ministros la voluntad del Congreso y manifestado el propósito decidido de gobernar sin él, manteniendo las fuerzas de mar y tierra y disponiendo de las rentas nacionales sin la necesaria autorización legislativa".

La organización contrarrevolucionaria tenía como centro a un Comité Ejecutivo compuesto por Gregorio Donoso, Carlos Walker Martínez y Carlos Lira; éste mantenía activo contacto con los subcomités de Valparaíso y Concepción.

El Comité de Valparaíso, dirigido por Enrique Valdés Vergara, logró comprometer a los jefes de la escuadra, entre ellos al capitán de navío Jorge Montt, que sería el jefe militar de la insurrección y posteriormente... Presidente de la República.

La jefatura de la escuadra exigió el embarco de los presidentes de las Cámaras en el buque donde izara su insignia el comandante en jefe. Rápidamente se trasladaron al primer puerto el vicepresidente del Senado, Waldo Silva, y el presidente de la Cámara de Diputados, Ramón Barros Luco.

A propósito de la defección de la escuadra, se cuenta que el diputado Benjamín Videla —amigo íntimo de Balmaceda— previno a éste diciéndole: "Excelencia, soy un viejo revolucionario y le aconsejo que desarme la escuadra". El Presidente respondió que jamás lo haría, ya que eso demostraría debilidad ante una institución que reconoce como jefe supremo al representante del Ejecutivo. "Está bien —replicó sombríamente Videla—, yo lo emplazo para dentro de pocos días"...

¿Sabía Videla las actividades opositoras dentro de la Armada, o fue una simple intuición? La verdad es que sus palabras resultaron proféticas: la escuadra sublevada decidió la suerte del conflicto armado y con ello el destino del gobierno más fecundo que ha conocido nuestra Historia.

III

Siempre se ha señalado al Presidente Balmaceda como un político romántico y soñador, y complementando ese pretendido romanticismo, su desconocimiento absoluto de la realidad y del momento histórico en que se desarrolló su gestión.

Nada más falso. Balmaceda asume el poder con un programa simple pero definido; premunido de sólidas ideas económicas y sociales, metódicamente las aplicará, a pesar de la oligarquía bancaria, el latifundio y el capitalismo inglés.

El pensamiento de Balmaceda era de una claridad meridiana. Creía firmemente en la capacidad de nuestro país para convertirse en una potencia industrial, teniendo como "capital inicial" las rentas del salitre.

El Estado tenía un papel esencial en el cumplimiento del objetivo anterior que, lógicamente, estaba en abierta pugna con el liberalismo imperante en la época, que predicaba eso de "todo se hace solo", tolerando, de paso, la penetración extranjera como algo "natural y progresista".

En la ciudad de La Serena, el 22 de marzo de 1889, Balmaceda pronuncia un discurso-programa:

"El Estado puede suministrar, en gran parte, los elementos en que las aptitudes individuales deben ejercer su acción directa y bienhechora, y por esto procuro que la riqueza fiscal se aplique a la construcción de liceos y escuelas y establecimientos de aplicación de todo género que mejoren la capacidad intelectual de Chile; y por eso no cesaré de emprender la construcción de vías férreas, de caminos, de puentes, de muelles y de puertos, que faciliten el trabajo, que alienten a los débiles y que aumenten la savia por donde circula la vitalidad económica del país".[11]

En otro aspecto, conocía la existencia de fuerzas sociales que se oponían a toda idea de cambio, empeñadas en mantener la situación semicolonial del país a cambio de ganancias fáciles y tranquilidad política.

Su clara inteligencia le permitió comprender que, a pesar del enorme progreso experimentado desde 1810, Chile aún no conocía una planificación armónica que desarrollara su enormes recursos humanos y materiales. La agricultura caminaba lentamente a una crisis, perdidos los mercados trigueros de California y Australia; enormes territorios esperaban la colonización para entregar sus frutos. Los transportes eran insuficientes para establecer las necesarias comunicaciones y valorar aquellas zonas aún inexplotadas. La minería del cobre estaba en crisis, ante la baja de precios y la rivalidad de Estados Unidos. El salitre, rescatado de manos inglesas, podía convertirse —según se ha señalado— en el "gran financista" de nuestro desarrollo. La industria, si bien más desarrollada que en otros países del continente, estaba estancada por falta de un mercado comprador interno y sin posibilidades de exportar.

Nuestro comercio era típico del país monoproductor: vendíamos minerales y materias primas, y comprábamos manufacturas y alimentos.

[11]Hernán Ramírez N., op. cit., pág. 110.

A este panorama, Balmaceda daba una respuesta realista y adecuada: "Si a ejemplo de Washington y la gran República del Norte, preferimos consumir la producción nacional, aunque no sea tan perfecta y acabada como la extranjera; si el agricultor, el minero y el fabricante construyen útiles o sus máquinas de posible construcción chilena en las maestranzas del país; si ensanchamos y hacemos más variada la producción de la materia prima, la elaboramos y transformamos en substancias y objetos útiles para la vida o la comodidad personal; si ennoblecemos el trabajo industrial aumentando los salarios en proporción a la mayor inteligencia de aplicación por la clase obrera; si el Estado, conservando el nivel de sus rentas y de sus gastos, dedica una porción de su riqueza a la protección de la industria nacional, sosteniéndola y alimentándola en sus primeras pruebas; si hacemos concurrir al Estado con su capital y sus leyes económicas, y concurrimos todos, individual o colectivamente, a producir más y mejor y a consumir lo que producimos, una savia más fecunda circulará por el organismo industrial de la República y un mayor grado de riqueza y bienestar nos dará la posesión de este bien supremo de pueblo trabajador y honrado: vivir y vestirnos por nosotros mismos".[12]

¿Son estas palabras de un soñador o de un teórico obsesionado?

La acción febril de la Administración Balmaceda se hizo sentir en todos los planos de la vida nacional, sin excepción.

[12]Hernán Ramírez N., op. cit., pág. 112.

Las obras públicas constituyeron la meta más preciada del balmacedato. Se trataba de equipar al país en forma tal, para que el desarrollo surgiera en forma "natural" sin necesidad de un gran sacrificio financiero, ni menos recurriendo a los prestamistas extranjeros.

Balmaceda construyó, o dejó en ejecución, cerca de 1.200 kilómetros de vías férreas, es decir, lo mismo que se había construido en todas las administraciones anteriores... juntas. Se mejoraron las antiguas líneas y emprendieron obras de ingeniería de gran envergadura, como los viaductos del Malleco, del Bío-Bío, del Laja y del Ñuble.

La firma Clark fue autorizada para emprender un ferrocarril transandino, uniendo Mendoza con Los Andes; otro, entregado a la firma Bustamante, aprovecharía el Paso de Antuco para conectar el sur de Chile con la Patagonia.

Las maestranzas chilenas podían proporcionar repuestos y equipos sin mayor dificultad. El año 1888 la Maestranza Lever y Murphy, de Valparaíso, construyó doce locomotoras para el servicio nacional.

Un proyecto presentado por el Ejecutivo pretendía la construcción de una trocha que uniera el centro del país con la provincia de Tarapacá, para aumentar la movilidad de carga hacia el norte. Desde el punto de vista estratégico su importancia era indiscutible, ya que se podían movilizar rápidamente tropas en caso de un ataque sorpresivo. La mentalidad conservadora de la época estimó el proyecto como una locura irrealizable; se creía unánimemente que la Armada bastaba para defender el emporio salitrero. El Estado Mayor no estimó necesario emitir, siquiera, una opinión.

La expropiación de las empresas particulares figuraba también en los planes nacionalistas del Gobierno. En un discurso pronunciado en Iquique, se notificaba: "Aspiro a que Chile sea dueño de to-

dos los ferrocarriles que crucen su territorio. Los ferrocarriles particulares consultan necesariamente el interés del particular, así como los ferrocarriles del Estado consultan, antes que todo, los intereses de la comunidad, tarifas bajas y alentadoras de la industria, fomentadoras del valor de la propiedad misma".[13]

En la provincia de Tarapacá, la empresa británica The Nitrate Railways Company of Tarapacá fue expropiada después de un juicio ante los tribunales por "incumplimiento de sus obligaciones". Una acción similar se emprendió con los ferrocarriles del Norte Chico, pero el proyecto —que afectaba intereses ingleses— no prosperó en el Congreso.

El mar no estuvo, en absoluto, ausente en la intuición genial del estadista.

El incremento de la propiedad salitrera en el período de la postguerra del Pacífico creó las condiciones favorables para la formación de una Marina Mercante. Desgraciadamente el "oro blanco" ofreció incentivos poderosos, que animaron la colocación de capitales y esfuerzo en su explotación y postergaron las inversiones navieras, abandonando el cabotaje y el comercio intercontinental a poderosas líneas francesas y alemanas, que cimentaron su grandeza, precisamente, en los muelles de Iquique y Pisagua.

Si el capitalismo nacional perdía una oportunidad, ésta no escapaba al criterio proteccionista de La Moneda; en febrero del año 1888 se renovaba a la Compañía Sudamericana una subvención "de cien mil pesos por dos años, y de setenta y cinco mil en cada uno de los años siguientes hasta 1894". Por

---

[13]Hernán Ramírez N., op. cit., pág. 123.

otra parte, se le cedía a perpetuidad el transporte *Amazonas*, que luego tendría destacada participación en el conflicto civil. Pero las concesiones que otorgaba el Gobierno llevaban en sí algunas obligaciones, entre otras la de tripular los vapores con un 75% de ciudadanos chilenos, de los cuales uno, por lo menos, debía ser oficial.

Estas sabias leyes no fueron aplicadas sino hasta 1895. La Marina Mercante, mecida por los siete mares, aún espera el instante de zarpar.

Dentro de la doctrina impuesta por el Gobierno, se habilitaron diez puertos para facilitar el cabotaje de navíos nacionales y extranjeros. Una de las grandes construcciones, dentro de este rubro, fue el dique seco de Talcahuano, aspiración antigua del transporte mercante.

Las líneas telegráficas aumentaron el tendido hasta 1.500 kilómetros, perfeccionando el sistema de comunicaciones.

La edificación escolar alcanzó la cifra de 80 establecimientos, que podían recibir a 35 mil estudiantes. El incremento de la educación era parte importante del programa de gobierno.

Numerosas reparticiones estatales contaron con edificios modernos, cuya solidez los mantiene aún habilitados. Se levantaron siete intendencias provinciales, el palacio del Ministerio de Industrias y Obras Públicas, la Escuela Militar y la Escuela Naval, y muchos otros.

La política agraria de Balmaceda continuaba la idea colonizadora del Presidente Montt y trazaba un esquema destinado a quebrar el latifundismo imperante en gran parte del territorio.

La agricultura chilena, marcada por la monoproducción triguera, había mantenido un ritmo productivo muy bajo, aunque satisfacía las necesidades internas. Las relaciones feudales en el campo y la falta absoluta de métodos modernos de explotación señalaban a nuestro agro en tránsito a una crisis definitiva. La única estación experimental y de enseñanza estaba ubicada en la Quinta Normal, en Santiago. La falta de caminos y ferrocarriles encarecía fatalmente los costos de producción.

La pacificación de la Araucanía —a sangre y fuego— dejó en manos del Estado ricos territorios que esperaban presencia humana para entregar sus bosques vírgenes y los productos que se apetecían.

En diciembre de 1889 se reorganizó la Oficina de Tierras y Colonización, con el fin de velar por la propiedad estatal y planificar la instalación de colonos.

Nuevas colonias se establecieron en Victoria, Ercilla, Quillén, Purén, Temuco, Traiguén, Lautaro, Contulmo, Quechereguas y otros puntos. En 1887 se crearon dos nuevas divisiones administrativas: Malleco y Cautín.

La inmigración europea fue significativa, llegando al país colonos franceses, suizos y alemanes. Muchos pequeños agricultores nacionales también se establecieron en la Frontera, especialmente en la provincia de Malleco, incentivados por la seguridad y la demanda de productos agrícolas.

Como complemento de lo anterior se procedió a la radicación de numerosas familias indígenas, que se incorporaron a la vida económica después de tres siglos de guerra "no declarada".

La visión totalizadora de esta política agraria tenía como objetivos mediatos los territorios de Chiloé a Magallanes. A fines de 1890, Punta Arenas contaba con 3.000 habitantes; el ganado lanar

llegaba a medio millón de cabezas, mientras que los lavaderos de oro, en Tierra del Fuego, produjeron 124,736 kilos. Los aserraderos regionales exportaban, incluso, a Buenos Aires. Durante la Administración Balmaceda el lejano territorio quedó administrativamente ligado al resto de la República.

La internación de maquinarias agrícolas y herramientas fue, desde luego, facilitada por un arancel aduanero especial. Finalmente, la necesidad de nuevas técnicas y personal especializado motivó la fundación de escuelas agrícolas en San Fernando, Elqui, Talca, Chillán, Concepción y Chiloé.

Una programación agraria, audaz y novedosa, trataba de superar el anquilosamiento colonial de la tierra e impulsaba la colonización del sur con nacionales y extranjeros, trasladando el centro de la producción hacia el corazón de la Araucanía..., rico territorio ya valorizado por el esfuerzo y coraje de nuestros colonos y soldados.

La minería era, a fines de siglo, la principal de nuestras exportaciones y, puede decirse, el eje del ejercicio económico del país.

La industria extractiva tenía como base la explotación del cobre y la plata, que se enviaban a los centros comerciales de Europa; nuevamente la monoproducción estrangulaba la posibilidad de una metalurgia nacional.

Chile era el principal productor del "metal rojo", llegando en un instante a cubrir un ¡60% de la producción mundial! Sin embargo, el mercado era arbitrariamente regulado por los capitalistas de París y Londres; aun más, el descubrimiento de yacimientos en Japón, México y Venezuela creó graves problemas que el Gobierno chileno no podía decidir. La producción bajó verticalmente y varios

establecimientos de Coquimbo y Atacama cerraron sus labores.

Balmaceda era consciente de la dependencia y propuso una solución radical: producir para el consumo interno, echando las bases de la industria pesada. En 1889 expresaba en La Serena: "Pero, señores, si la vida industrial de la provincia sufre hoy las zozobras de las oscilaciones del mercado de los cobres, como en el sur sufre parcialmente la industria agrícola, persuadámonos de que la industria minera y la agrícola necesitan convertirse en industrias de elaboración que estimulen los salarios, que vivan del consumo directo y no de establecimientos extranjeros o de sindicatos que juegan a las especulaciones inciertas de los juegos que precipitan.

"Si para iniciar los fundamentos de la industria elaboradora de los cobres fuera necesario el auxilio del Estado, yo creo que habría llegado el momento de poner la fortuna pública al lado de la industria cobrera y salvarla para bienestar nuestro y mantenimiento de las fuentes productoras del comercio exterior de Chile".[14]

Como es de suponer, la oposición congresista postergó indefinidamente estos planteamientos; apenas si en 1888 aprobó el nuevo Código de Minas, que rigió hasta 1930 la legislación minera de Chile.

Con el mismo criterio futurista con que se encaraban la industrialización y la agricultura, Balmaceda no olvidó a los cuadros técnicos que movilizarían los gigantescos recursos mineros: a fines de su Gobierno funcionaban tres escuelas prácticas de minas, en Copiapó, La Serena y Santiago.

El fatalismo monoexportador no conmovió a los gobernantes, cuya mentalidad colonizada creía que Inglaterra era el "taller del mundo" y que

---

[14]Hernán Ramírez N., op. cit., pág. 147.

nuestra obligación era enviar materias primas a perpetuidad. Balmaceda sería el único en plantear una posibilidad de desarrollo independiente del mecanismo capitalista, teniendo como base la metalurgia y la riqueza mineral.

Como hemos señalado en páginas anteriores, la industrialización fue uno de los puntos capitales del programa de gobierno.

La incorporación de Tarapacá y Antofagasta trajo una prosperidad artificial que luego se agotaría irremediablemente; era preciso invertir en rubros más perdurables de riqueza y, en primer lugar, crear los instrumentos adecuados para una industria nacional.

Las ideas librecambistas propugnadas por el liberalismo y los prejuicios sociales que rechazaban el trabajo manual fueron obstáculos difíciles de vencer en un país acostumbrado a consumir la manufactura europea y que nunca pensó en el autoabastecimiento.

El año 1887 fue creado el Ministerio de Industrias y Obras Públicas, con el fin de entregar al Estado la planificación de una política fabril, realista y urgente.

En 1883 se había fundado la Sociedad de Fomento Fabril, cuyos fines coincidían con los propuestos por el Gobierno. En un folleto explicativo leemos esta declaración de principios: "Chile puede y debe ser industrial. Probar esta idea hasta la evidencia, establecerla como máxima de todos, pueblo y gobierno, pobres y ricos, llegar a hacer de ella el punto de mira y el solo objetivo racional de los hombres laboriosos y de los acaudalados capitalistas... Debe ser industrial por su agricultura, porque la feracidad de las tierras de todo el Valle Central reclama cultivos más ricos... Debe

ser industrial por su minería, porque su verdadera riqueza consiste no en reventones o vetas de plata o cobre con centenares de marcos en su ley, sino en sus montañas de metales pobres que ofrecen ganancia segura y verdadera por largos años al industrial inteligente... Debe ser industrial por las condiciones de su raza, inteligente y fuerte, apta para comprender y dirigir cualquier maquinaria a poco que se le enseñe y capaz de repetir cualquier trabajo con sólo encomendarlo a su proverbial entusiasmo y buena voluntad".[15]

La enseñanza industrial era complemento ideal para una política de tan largo alcance. Así en Santiago se fundó la Escuela de Artes y Oficios y la primera escuela técnica femenina, ambas modelos en Sudamérica.

Después de la guerra civil, más de cien fábricas, en todo el territorio, daban testimonio del esfuerzo de Balmaceda, desmintiendo a los voceros del libre cambio con bandera inglesa.

Las finanzas públicas y la reforma bancaria fueron capítulos importantes en la evolución económica que propugnaba Balmaceda. El mismo fue víctima del sistema bancario y —debemos recordar— lo llevó prácticamente a la ruina cuando construía el canal de Las Mercedes.

El año 1891 operaban en Chile treinta y tres bancos, incluyéndose la Caja de Crédito Hipotecario y la Caja de Ahorros. La red bancaria era, ciertamente, desproporcionada para un país cuya economía dependiente estaba a merced de las crisis internacionales y los vaivenes del mercado.

La existencia de tales instituciones sólo se

---

[15]Hernán Ramírez N., op. cit., pág. 149.

puede explicar a través del desorden financiero que fue característico de la República. Las emisiones sin respaldo ni control, lanzadas por cualquier banco; el crédito usurario, los préstamos al "Estado liberal" y la quiebra irresponsable, caracterizaban el panorama financiero nacional.

Balmaceda sabía, mejor que nadie, la influencia morbosa de la banca nacional en el desarrollo económico. Su opinión era "... que no debía dejar entregado el equilibrio general de los negocios del país a los cálculos y conveniencias de personas que no tienen la misión de ocuparse de su prosperidad, sino de la suya propia, como se ha hecho entre nosotros con los bancos..."[16]

La solución propuesta era la creación de un Banco del Estado, que manejara los recursos que se necesitarían para impulsar metódicamente el desarrollo. En mayo de 1891 se nombró una comisión "compuesta de Pedro N. Gandarillas, Manuel Arístides Zañartu y Manuel Salas Lavaqui, para que estudie un proyecto relativo a la fundación de un banco que, sirviendo a los intereses generales de la industria y del comercio, tenga, por el concurso y acción del Estado, la necesaria estabilidad y las condiciones propias para asegurar moderadas tasas de descuentos e intereses".[17]

Este mensaje fue presentado al Congreso Constituyente el 9 de julio de 1891, es decir en plena conflagración civil. Aprobado en todas sus partes, no alcanzó su promulgación.

---

[16]Hernán Ramírez N., op. cit., pág. 134.
[17]Citado por Francisco A. Encina, *La Presidencia de Balmaceda*, pág. 426. Editorial Nascimento, Santiago, 1952.

El fomento de la educación constituía, dentro del pensamiento de Balmaceda, la base lógica de la promoción económica y el progreso nacional. Sus postulados tendían a la eliminación total del analfabetismo, extensión de la instrucción primaria, fomento de la pedagogía técnica y, en última instancia, la planificación científica que permitiera quebrar el anquilosamiento intelectual del país.

La enseñanza primaria se incrementó en 300 escuelas, creadas entre 1887 y 1890, servidas por 1.800 profesores (en el año 1886 eran apenas 1.232). Un proyecto para crear una Superintendencia de Instrucción Primaria fue rechazado categóricamente por el Congreso.

Paralelamente se crearon escuelas de preceptores en Chillán y La Serena. Un sistema de becas permitió enviar a Europa un buen número de maestros, a la vez que se contrataron varios pedagogos alemanes para que renovaran nuestro sistema educacional.

La enseñanza secundaria recibió un impulso inusitado; diez liceos dan testimonio de ello: Antofagasta, Quillota, Liceo de Niñas de Valparaíso, Miguel Luis Amunátegui, Valentín Letelier e Internado Barros Arana, en Santiago; Constitución, Angol, Temuco y Osorno.

A fines de la guerra civil, Chile contaba con treinta y dos planteles secundarios, entre ellos el primer liceo fiscal de niñas que se fundó en la República.

La eficiencia de la enseñanza fue garantizada por la fundación del Instituto Pedagógico, que al abrir sus puertas en 1889 contaba con cuatro departamentos: castellano y latín; francés, inglés y alemán; historia y geografía; matemáticas y ciencias naturales.

La mayoría de los profesores fueron contratados en Alemania. Jorge Schneider enseñaba sicología y pedagogía; Juan Steffen, historia y geogra-

fía; Federico Hansen, filología; Reinaldo von Libenthal, matemáticas; Alfredo Beutell, ciencias físicas, y Federico Johow, ciencias naturales.

Es interesante destacar que en septiembre de 1889 se celebró el Primer Congreso Pedagógico, cuyas deliberaciones y conclusiones señalaron la política educacional a ejecutar en los años venideros.

La educación superior tuvo un lugar destacado en los planes renovadores del Gobierno. Se reorganizaron las Escuelas de Medicina, Farmacia y Leyes, con la finalidad de incluirlas dentro de la planificación revolucionaria que se operaba.

La Escuela de Ingeniería quedó modernizada y equipada para formar los cuadros técnicos que el país reclamaba imperiosamente.

Un proyecto, original y audaz, complementaba lo anterior. El 1.º de junio se presentó al Congreso la legislación que creaba una Academia Nacional destinada exclusivamente a la investigación científica y creación artística. Esta academia se organizaba en secciones de Medicina y Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Políticas, Leyes, Humanidades y Bellas Artes. Como organismos complementarios habría un Ateneo de Bellas Letras y una Academia de Ciencias Políticas, en Santiago. La motivación cultural era llevada a provincias, consultándose Ateneos de Ciencias, Artes y Letras en Iquique, La Serena, Valparaíso, Talca, Chillán y Concepción.

Como era de esperar, la oposición irracional y prepotente del Congreso Nacional postergó indefinidamente la aprobación del proyecto.

Una simple mirada al mapa de Chile basta para descubrir la posición insular de nuestro país. Esta peculiar conformación del territorio, a la vez que es un llamado al espíritu aventurero y em-

prendedor de la raza, es un grito de alerta ante la inmensidad y longitud de una costa inerme, expuesta al ataque certero de un enemigo audaz.

Esto fue claramente comprendido por el Ejecutivo y no escatimó sacrificios para convertirnos en una potencia naval de primer orden. Fue así como se ordenó la construcción del acorazado *Capitán Prat*, de 6.670 toneladas, dotado de los últimos adelantos de la técnica náutica. Más adelante se encargaron dos modernas unidades en los astilleros de Forges et Chantiers de la Méditerranée; eran éstos los cruceros *Presidente Pinto* y *Presidente Errázuriz*, de 2.080 toneladas cada uno. En ellos se cifraron las esperanzas de Balmaceda para un rápido triunfo en la guerra civil. La vigilia duró ocho largos meses.

Dos cañoneras lanzatorpedos: la *Almirante Condell* y *Almirante Lynch*, de 770 toneladas cada una; las escampavías *Cóndor* y *Huemul*, de 148 toneladas, y dos lanchas torpederas, venían a completar la ya poderosa escuadra chilena. Las nuevas adquisiciones, junto a los blindados *Cochrane* y *Blanco*, daban a nuestra Armada una potencialidad que no era superada por las fuerzas navales de Perú y Argentina combinadas y la colocaban entre las diez primeras del mundo.

Los marinos chilenos fueron los primeros que experimentaron con los torpedos Whitehead, formidable arma ofensiva que sólo era poseída por cuatro naciones europeas, siendo Chile la única en Hispanoamérica.

En plena guerra civil, la torpedera *Lynch* hundiría al acorazado *Blanco* en la bahía de Caldera, provocando el interés internacional por la nueva arma. Historiadores extranjeros atribuyen, erradamente, el primer empleo exitoso del torpedo durante la batalla de Tsushima, cuando un destructor japonés abatió a un crucero ruso en la guerra de 1905..., esto es catorce años después de la acción de Caldera.

El perfeccionamiento de las tripulaciones complementaba el poder material de la escuadra. En 1887 se creó la Escuela de Grumetes y Aprendices de Marineros, destinada a la formación de los cuadros medios de la institución. Con fecha 3 de julio de 1889 iniciaba sus actividades la Escuela de Ingeniería Naval, cuya finalidad era "instruir y entrenar a los oficiales, suboficiales y marineros en la operación, mantención y reparación de las plantas propulsoras y máquinas auxiliares de los buques de la Armada".

La defensa terrestre de la ínsula no esperó demasiado. Un ambicioso plan de fortificaciones, expresión realista de la promesa de "fortificar cada año un puerto", se puso en marcha a partir de 1887. Para el proyecto preliminar se contrató en Alemania a Gustavo A. Betzhold, quien debería levantar en forma inmediata los planos de las defensas de Valparaíso, Talcahuano e Iquique. Se consultaba también la construcción de fuertes en Antofagasta, Coquimbo, Lota, Corral y Ancud.

A fines de la Administración Balmaceda, Valparaíso estaba eficientemente artillado y era una plaza inexpugnable en el Pacífico.

La idea de una gran base naval en Llico figuró en los planes de la estrategia costera. "Es opinión del Gobierno —decía Balmaceda en su mensaje al Congreso, el año 1889—, sustentada por nuestros más distinguidos marinos, que la escuadra de Chile, aun reforzada por naves poderosas, carece de un puerto seguro donde basar sus operaciones militares en tiempo de guerra. Un puerto seguro e inexpugnable, con diques, astilleros y arsenales completos, es no sólo el resguardo de nuestro poder marítimo, sino también el mejor medio de ofender al enemigo en caso de guerra"...[18]

[18]Hernán Ramírez N., op. cit., pág. 168.

Fue éste uno de los tantos planes que frustró el conflicto armado. Retomado en sus líneas esenciales, sirvió para la construcción del puerto militar de Talcahuano.

Pero la mirada del visionario fue más allá de los farellones costeros. En septiembre de 1887 autorizaba al capitán Policarpo Toro para iniciar las negociaciones que finalizarían con la incorporación de la isla de Pascua a nuestra soberanía. La estrella solitaria —como otrora— seguía flameando rumbo a Oceanía.

El silencio con que se pretende cubrir la grandeza del balmacedato ha alcanzado también a su empeño marítimo: no existe un bronce, un puerto o una unidad naval que recuerde al gobernante que terminó —pese a la adversidad— la obra iniciada por el ministro Portales.

El Ejército —triunfador en dos guerras internacionales— recibió el aliento renovador que merecía su prestigio.

El año 1890 se contaba con 5.885 soldados, pertenecientes al ejército de línea, aunque en realidad su número nunca superó los 5.000, debido al alto porcentaje de deserciones. Paralelamente existía la Guardia Nacional, especie de milicia cívica, cuya instrucción le permitía integrarse en unidades regulares ante una emergencia. Una movilización decretada por el Estado Mayor ponía a 100 mil hombres sobre las armas en menos de 48 horas.

En 1887 se creó la Escuela de Clases, instituto para la formación de la suboficialidad. En sus primeros cursos reentrenó a cabos y sargentos, pero luego incorporó a aquellos jóvenes que sentían vocación por la carrera de las armas.

La Escuela Militar modificó sustancialmente sus

planes de estudio, con el fin de formar una oficialidad eficiente y con un alto espíritu profesional. Como dato marginal debemos señalar que después de la Guerra del Pacífico el cuadro de oficiales se reclutaba entre los sargentos primeros y, a veces, se llamaba a simples paisanos con un mínimo de cultura. La Escuela Militar graduó el año 1889 nueve subtenientes, aunque contaba con cien cadetes en sus aulas.

Junto con la renovación pedagógica se comenzó la construcción de un nuevo edificio para nuestro primer plantel militar.

A mediados de 1887 entró en funciones la Academia de Guerra, instituto superior equivalente a la Universidad y cuyo objetivo es el perfeccionamiento de oficiales de alta graduación.

Por gestiones del general Emilio Sotomayor se contrató en Alemania al capitán Emilio Körner, profesor en la Escuela de Artillería e Ingenieros de Charlottenburgo, para que se desempeñara como subdirector de la Escuela Militar. Körner sirvió las asignaturas de Dibujo y Fortificaciones y, como novedad táctica, introdujo el "orden disperso" en la instrucción de infantería (hasta entonces se conocía el ataque en "línea frontal").

Otros organismos castrenses se reorganizaron sobre bases modernas y de alta expresión técnica. Entre estos últimos se debe señalar la Dirección General del Parque y Maestranza, dividida en tres secciones, equipadas con el mismo material usado en Europa: Sección Parque, Sección Maestranza y la Fábrica de Cartuchos y Artificios. Esta se transformaría más tarde en la Fábrica y Maestranza del Ejército (FAMAE).

Paralelamente se organizaron la Dirección del Servicio Sanitario y la Intendencia General del Ejército, encargadas de la sanidad militar y la administración, respectivamente.

El armamento fue renovado casi en su totali-

dad. Se iniciaron las adquisiciones en Alemania de material Krupp y Schneider, prescindiendo del mercado francés y norteamericano que entonces nos abastecían (armas Grass, Winchester y Comblain).

En la primera década de este siglo se implantará el Servicio Militar Obligatorio y la adopción de reglamentos, uniformes y ordenanzas alemanes.

En líneas generales, Balmaceda continuó la política armamentista comenzada por el Presidente Santa María. Terminada la Guerra del Pacífico, Chile surgió como la primera potencia militar del continente: un ejército de 70 mil veteranos, una de las mayores escuadras navales del mundo, nos imponían como el "árbitro necesario" en todo el ámbito americano.

Cuando la Cancillería argentina sugiere una ocupación del territorio patagónico..., Chile ancla su escuadra al sur de Buenos Aires y elabora un plan impecable para tomar la ciudad capital por medio de un asedio terrestre y marítimo.

La crisis económica violenta que estalla después de 1891 alcanza, inevitablemente, a las Fuerzas Armadas; incapaces de resistir la carrera armamentista impuesta por Argentina, debimos aceptar "su solución" en el asunto limítrofe del extremo sur.

Las relaciones exteriores reflejan otro aspecto de la Administración Balmaceda, plena de idealismo y energía, frente a un nuevo mundo que empieza a ser surcado por las banderas imperiales de Inglaterra y Estados Unidos.

Naturalmente, el período de postguerra agudizó

los problemas con nuestros vecinos, aún perplejos ante la implacable diplomacia chilena.

Es interesante destacar que el ilustre mandatario dirigió, personalmente, nuestras relaciones a través de una copiosa correspondencia directa con los diplomáticos chilenos acreditados en el exterior.

Con la República Argentina existía —como se ha señalado anteriormente— una situación muy delicada a causa del arbitraje sobre los territorios de Patagonia y Tierra del Fuego.

Sin embargo, los problemas derivados de la guerra que, incluso, involucraban la intervención de los Estados Unidos; las demarcaciones limítrofes y las estúpidas rencillas internas no permitieron al Presidente Santa María lograr una decisión en la ya larga disputa vecinal.

Los gobernantes argentinos, actuando con prudencia y sagacidad, no forzaron el arreglo ante una potencia victoriosa, dueña de recursos ilimitados y capaz de movilizar un ejército moderno en pocas horas.

Durante sus primeros años de gobierno, quizás si Balmaceda pudo lograr un tratado ventajoso para Chile con el respaldo de "la razón y la fuerza"...; nuevamente los afanes de la política interna postergaron indefinidamente el acuerdo.

En 1890 se decidió crear una Comisión Mixta de Límites, ante la certeza de la penetración argentina en valles de la cordillera aún no explorados.

Como era de esperarse, el desenlace de la guerra civil eliminó la diplomacia balmacedista y la situación militar quedó profundamente menoscabada. En 1892, el ministro argentino Zeballos ofreció movilizar tropas contra Chile, cuando el Presidente norteamericano Harrison planificaba una agresión a raíz de un incidente diplomático.

Luego de la guerra, Bolivia recurrió al revanchismo más irracional y morboso y que se manifestaba, incluso, en la hostilidad física hacia los ciudadanos chilenos residentes. La Cancillería se vio obligada a intervenir enérgicamente cuando se insinuó la posibilidad de confiscar empresas cuyos intereses afectaban a nuestro país.

El Gobierno del Altiplano formalizó una verdadera "guerrilla diplomática" basándose en la interpretación de los tratados y acuerdos firmados después del 79; cuando se crea la provincia de Antofagasta, Bolivia envía una violenta protesta, pues entendía que "el pacto de tregua no contemplaba la ocupación del litoral por la potencia vencedora" (sic).

Para reafirmar su posición, a fines de 1886 Bolivia declaró bajo su jurisdicción varias poblaciones de la provincia; aunque no pasaba de una medida simbólica, el Gobierno chileno inició gestiones para impugnar tan insólito criterio. Aun así, las autoridades bolivianas siguieron creando problemas administrativos: se protestó por la ocupación de locales municipales, el cobro de contribuciones, la percepción de derechos aduaneros, etc.

Curiosamente, el tribunal arbitral que debía conocer las reclamaciones chilenas sólo tuvo en vista dos juicios: uno de la Compañía Minera Huanchaca, fallado favorablemente, y otro del establecimiento de Chiu-Chiu, que traspasó a tribunales ordinarios.

Durante la guerra civil, el Gobierno boliviano fue el único que reconoció a los contrarrevolucionarios, en armas contra Balmaceda.

En el Perú, la animosidad contra Chile tenía raíces profundas. La postguerra no hizo más que exagerarla. Una sabia política de acuerdos, susten-

tada y aplicada por nuestra Cancillería, detuvo, en gran parte, los ímpetus revanchistas de Lima.

Posteriormente al Tratado de Paz, se firmaron convenios sobre venta de guano peruano al extranjero, demarcación de límites al norte del departamento de Tacna (temporalmente en manos chilenas), ampliación del plazo dado a los habitantes de Tarapacá para optar por la ciudadanía chilena o peruana, etc.

Por último, el 8 de enero de 1890 se logró un acuerdo definitivo sobre varios asuntos económicos que amenazaban con prolongarse eternamente, relativos a relaciones comerciales del Estado peruano con empresas extranjeras.

Durante el conflicto civil, el Gobierno peruano mantuvo una estricta neutralidad y su actitud puede calificarse de benevolente hacia el bando balmacedista; muchas unidades militares y políticos que buscaron refugio en su territorio, recibieron un trato cordial y amistoso. La prensa peruana adoptó un tono prudente, sin caer en las exageraciones de algunos periódicos latinoamericanos y europeos.

IV

El 1.º de enero de 1891 el Presidente Balmaceda lanzó un dramático Manifiesto, aclarando su posición ante el golpe civil del Congreso. Este último fue declarado "en receso" hasta el mes de marzo, fecha en que terminaba su ejercicio legal. El día 5 del mismo mes se firmó el decreto que declaraba vigentes los presupuestos del año anterior, ya que la minoría congresista había insistido arteramente en el rechazo.

La convicción de la victoria final conformó en La Moneda una atmósfera de peligrosa confianza. Al parecer, nadie —ni el propio mandatario— contaba con el apoyo del capital inglés a la montonera congresista y la traición flagrante de numerosos militares de alta graduación, entre ellos el propio edecán de la Presidencia, coronel Eduardo Lopetegui.

El Ejército mantuvo una actitud digna y leal hacia el Ejecutivo. A pesar de sus menguadas dotaciones, contaba con cuadros veteranos de una guerra internacional, excelente armamento y arsenales bien provistos. La tradición de coraje y sacrificio, galvanizada por mil combates, no sería desmentida en ocho meses de guerra civil.

La vida administrativa y comercial seguía normal en todo el territorio, a pesar de que el día 10 se

establecieron los juzgados militares. Incluso la prensa no estuvo sometida a censura alguna y el 4 apareció una refutación enérgica al Manifiesto del Presidente Balmaceda, firmada por... Julio Zegers, naturalmente.

En la mañana del 7 de enero una noticia inesperada llegaba a La Moneda y luego recorría el territorio: la Armada se había sublevado y el vicepresidente del Senado, Waldo Silva, y el presidente de la Cámara, Ramón Barros Luco, aparecían como jefes visibles de la rebelión: embarcados en las naves que formaban la División Naval de la "revolución", procedieron a nombrar jefe y responsable militar de la sublevación al capitán de navío Jorge Montt.

Balmaceda respondió asumiendo, por decreto, "el ejercicio de todo el poder público", quedando suspendidas las "leyes que embaracen el uso de las facultades que fueren menester para asegurar el orden y la tranquilidad". La élite parlamentaria encontró otra justificación para su crimen de lesa patria: "había que derribar a la dictadura".

El Ejecutivo administró medidas extremas ante la nueva situación: la prensa opositora fue clausurada y detenidos, preventivamente, algunos políticos liberales y conservadores. El territorio se declaró en estado de asamblea, y el Código Militar se impuso, prácticamente, como única legislación; el Ejército fue reorganizado febrilmente, los batallones de "cívicos" se elevaron a regimientos regulares, a la vez que se aumentaban en un 50% todos los sueldos. Esto se hizo extensivo a los contingentes de la escuadra leal. Las unidades sublevadas fueron declaradas "fuera de la ley".

Entretanto, la situación de los "congresistas" —como se autonombraron— era incierta e incluso desesperante. Al promediar enero se abandonó toda esperanza de un pronunciamiento del Ejército, aunque este último figuraba en todas las proclamas del

Comité Revolucionario que Carlos Walker Martínez dirigía, desde la clandestinidad, en Santiago. La adhesión masiva que, en algún momento, entusiasmó a los jefes de la rebelión, no se manifestó y, por el contrario, la indiferencia más absoluta recibían las pomposas declaraciones redactadas en la bahía de Valparaíso.

Los jefes navales elaboraron un plan de largo alcance que consultaba el bloqueo y hostigamiento de los puertos y la búsqueda de recursos que financiaran la formación de un "ejército", capaz de efectuar desembarcos por sorpresa en el litoral.

El primer objetivo no representó problema, desde el instante que prácticamente toda la fuerza naval había adherido a la sublevación.

El blindado *Blanco Encalada* y el monitor *Huáscar* permanecieron el mes de enero en la rada de Valparaíso, en espera de voluntarios; el acorazado *Cochrane* —a cuyo bordo iba Barros Luco— y la cañonera *Magallanes* se dirigieron a bloquear Pisagua e Iquique. El crucero *Esmeralda* fue enviado al sur, para que sus jefes trataran de convencer a los comandantes de las torpederas *Condell* y *Lynch*, recién construidas en Europa y que llegaban vía estrecho de Magallanes. La corbeta *Abtao*, que volvía de un viaje de instrucción, también debía ser abordada en las inmediaciones de Punta Arenas. La corbeta *O'Higgins* y el transporte *Amazonas* zarparon, el día 10, con rumbo a la provincia de Coquimbo, debiendo establecer allí una "base de operaciones", para posteriormente incursionar hacia el extremo norte.

La escuadra sublevada ocupó los transportes *Aconcagua* y *Cachapoal*, surtos en la rada de Valparaíso. Lo propio se hizo con el barco alemán *Cleopatra*, en cuyas bodegas se encontraron 4.500 rifles Mannlicher, destinados al Gobierno; hubo, sí, un pequeño inconveniente: no traía cartuchos.

El transporte *Aconcagua* logró establecer con-

tacto, en el sur, con la *Abtao*, cuyo comandante, Alberto Silva Palma, y sus oficiales adhirieron entusiastamente al movimiento.

El destino de las torpederas sería muy distinto. La *Lynch* había llegado a Punta Arenas, adelantándose a su gemela; su comandante, capitán Arturo Fernández Vial, no ocultó sus simpatías por la causa de la Armada, siendo apresado por las autoridades. Igual procedimiento se adoptó con el capitán de la escampavía *Pilcomayo*. Rápidamente se envió a las unidades, con nueva oficialidad, rumbo al Atlántico, encontrando en su ruta a la *Condell*, cuyo jefe, capitán Carlos Moraga, permaneció fiel al poder constituido.

Las primeras operaciones de la División Naval no fueron positivas: apenas se ocupó La Serena por unos días, se saquearon algunas oficinas fiscales y en un combate cerca de Pisagua estuvo a punto de ser capturado el coronel Del Canto, que había abandonado su cargo oficial en Tacna para unirse al movimiento subversivo.

El día 16 de enero una andanada de los fuertes de Valparaíso provocó serios daños y varios muertos en el *Blanco Encalada;* incluso un proyectil atravesó el camarote del senador Waldo Silva, aunque sin consecuencias. El bloqueo fue abandonado apresuradamente...; ¡al parecer, los marinos chilenos ignoraban que tenían el puerto mejor artillado del Pacífico!

Un decreto fechado el 30 de enero prohibió la transferencia de bienes pertenecientes a los opositores. Los bancos fueron intervenidos e incluso encarcelados dos gerentes sospechosos de financiar la sublevación: Alejandro Vial y Francisco Valdés Vergara.

El Gobierno se vio compelido a tomar medidas

extremas ante la impunidad con que actuaban algunos prohombres de la oligarquía y sus agentes menores. La prensa de oposición fue sencillamente suprimida y el control de la vida cotidiana se impuso rigurosamente.

El mes de febrero, sin embargo, definió la situación..., que se mantendría hasta el último día de la contienda. Después de encarnizados combates, los "congresistas" lograron apoderarse de la región salitrera, cumpliendo el segundo objetivo propuesto: una fuente permanente de entradas que les permitiera crear una fuerza armada.

Balmaceda comprendió lo que significaba el emporio salitrero para los sublevados y apresuró el envío de tropas al norte, eludiendo hábilmente la vigilancia de la escuadra.

El día 6 un desembarco sorpresivo de tropas cerca de Pisagua, al mando del coronel Estanislao del Canto, logró la captura del puerto, casi sin pérdidas humanas. Las autoridades de Iquique enviaron al coronel Eulogio Robles a recuperar la ciudad; al mismo tiempo una columna salía desde Tacna con el mismo objetivo, al mando de los coroneles Miguel Arrate y Emilio Gana.

El combate, sostenido cerca de San Francisco, se resolvió en una nueva derrota para los gobiernistas. El intendente de Tarapacá, Manuel Salinas, envió las últimas fuerzas de la plaza, al mando del coronel en retiro José María Soto, en auxilio de Robles.

El encuentro se precipitó en Huara y fue una aplastante victoria para el viejo coronel Soto. Pero la alegría de los primeros laureles pronto se ensombreció ante los luctuosos sucesos acaecidos en el puerto de Iquique, desguarnecido totalmente a causa de las acciones bélicas.

En los primeros días de febrero, los trabajadores de la pampa salitrera intentaron una marcha sobre Iquique, para protestar por el decreto gubernamental que prohibía la exportación de salitre. La medida fue revocada por el propio Ejecutivo, poniendo como única condición el pago de los derechos correspondientes en la Tesorería de Valparaíso. Los obreros, desconociendo esto último, insistieron en su actitud, siendo reprimidos sin piedad por las autoridades civiles y militares.

La ausencia temporal de tropas alentó una nueva marcha que, desgraciadamente, desvirtuó su finalidad, terminando en un saqueo indiscriminado del comercio. La razón era muy simple: en las oficinas salitreras los víveres estaban agotados a causa del bloqueo impuesto por las naves sublevadas. El intendente Salinas vio saqueada su casa y hubo de refugiarse en un barco británico. Los jefes navales, que se encontraban en los buques, desembarcaron tropas y reprimieron con fiereza a la población... Pero ¿quiénes eran los responsables directos del motín?

El capitán de fragata Vicente Merino Jarpa ocupó el edificio de la Aduana[19] y esperó la llegada del coronel Soto. El encarnizado combate duró más de veinte horas y terminó sólo por mediación del cuerpo consular. Soto se rindió con honores militares, siendo posteriormente destituido —al igual que el intendente Salinas— por orden expresa del Presidente Balmaceda.

El futuro de Iquique parecía incierto. Un fuerte contingente de tropas que venía desde Tacna, al mando del coronel Arrate, se unía el 20 de febrero a la división vencedora en Huara, y días después hacía contacto con los batallones de Gana. Se esperaba, incluso, la llegada de 900 hombres, que venían desde Calama al mando del coronel Hermógenes Ca-

[19] Actualmente declarado Monumento Nacional.

mus, con el fin de reforzar a las huestes de Robles.

Las fuerzas "congresistas" salieron a la pampa decididas a definir la situación y vengar la derrota de Huara. El encuentro tuvo lugar en los alrededores de Pozo Almonte, el 7 de marzo. El coronel Del Canto, nuevamente, mandaba las fuerzas rebeldes, cuyo coraje, cercano a la desesperación, les entregó una victoria indiscutible y —lo que era más importante— la posesión definitiva de la provincia de Tarapacá.

La sangrienta batalla tuvo un epílogo vergonzoso... y que no sería el único durante el conflicto: numerosos oficiales balmacedistas, prisioneros o heridos, fueron asesinados a mansalva con la complacencia de los jefes opositores. Incluso el coronel Robles —veterano de la Guerra del Pacífico— fue alevosamente ultimado en la ambulancia donde yacía herido.

Las rentas del salitre —que aportaban la tercera parte de las entradas fiscales de Chile— proporcionarían recursos incalculables a la contrarrevolución si lograba ocupar los establecimientos productores y las aduanas. El Ejecutivo dio órdenes "de arrasar todas las oficinas salitreras, sin exceptuar una sola, y en condiciones que no pudieran rehabilitarse en un año". El intendente de Antofagasta transmitió la orden, en clave secreta y personal, al intendente Salinas, en Iquique. Los acontecimientos acaecidos impidieron que se descifrara el drástico mensaje.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Domingo Godoy, comunicó verbalmente a Mr. Kennedy, embajador inglés, que "ante la eventualidad de abandonar Tarapacá se procedería a la destrucción de toda la maquinaria y útiles de trabajo de las oficinas salitreras". Como es lógico, el Gobierno

británico protestó enérgicamente, resaltando los años de esfuerzo y las inversiones que la industria representaba para algunos súbditos ingleses. El Gobierno chileno garantizó el pago inmediato de indemnizaciones, en libras esterlinas.

La guerra civil de 1891 aportó páginas brillantes a nuestra Historia Militar, sospechosamente olvidadas por los historiadores oficiales y los falsificadores solemnes. Una de esas páginas es la famosa retirada de la división Camus, a través de Bolivia y Argentina, que ha sido comparada —justo afán— a las hazañas de los héroes espartanos de la Antigua Grecia.

Al comenzar las operaciones en el extremo norte del país, se envió una cantidad apreciable de tropas para organizar una defensa fuerte y estable. Entre los regimientos movilizados figuraban el "Buin" 1 de línea, el "Arica" 4 de línea, el "Mulchén" y los batallones "Andes", "Talca" y "San Felipe", protagonistas de la retirada.

La rendición de Iquique y el fracaso del coronel Soto decidieron al Gobierno a efectuar una maniobra estratégica de gran alcance: se trataba de retirar el ejército desde Antofagasta hacia Calama, para concentrar allí la resistencia. Este plan no era producto de la desesperación del momento, sino una idea largamente meditada por el Estado Mayor y el propio Presidente Balmaceda.

Calama, por su posición geográfica, sería un magnífico centro de "operaciones de hostilizamiento" hacia la costa. Claro que, ocupados los puertos, no iba a mantenerse tal situación por mucho tiempo; en todo caso, se ordenó el traslado por ferrocarril de toda la guarnición al interior, de donde se debía acudir, a marchas forzadas, en auxilio de Robles, aislado cerca de Iquique. Ante orden tan

perentoria, el intendente Villegas y el coronel Hermógenes Camus —jefe eventual de la operación y comandante del "Buin"— iniciaron las indagaciones para establecer en qué condiciones podían marchar 2.000 hombres que cubrirían 150 kilómetros de desierto.

Como era habitual en esa época, los bagajes y abastecimientos eran entregados a particulares, contratados para tal efecto.

La primera fase de la marcha consultaba como objetivo el pueblo de Quillagua, y como vía el río Loa. Los primeros días de la expedición fueron terribles: el calor sofocante del día y el frío glacial de la noche provocaron enfermedades, que el doctor Mandiola Gana —médico de la columna— llama "enfermedades del clima". Carretas, mulares y las mujeres de algunos soldados contribuían a la confusión ya creada por los enfermos.

En Quillagua se confirmó la derrota de Pozo Almonte por medio de la orden del día. Una perspectiva seria se presentaba ante la división. Un telegrama, de fecha 11 de marzo, ordenaba el retorno a Calama. En dicha ciudad se procedió a la reorganización de las unidades, en base a 2.542 hombres. La nueva unidad se llamó "División de Calama".

El desembarco de los "congresistas" en Antofagasta motivó el acantonamiento de la división en San Pedro de Atacama, a 60 kilómetros de Calama. Cuando se iniciaban los preparativos para el traslado, "una comunicación de la Presidencia de la República insinuó la idea de retirarse de Calama a Ollagüe —183 kilómetros por ferrocarril— para seguir de allí a Bolivia y Argentina, y luego a Santiago, vía Mendoza". Una junta de guerra aprobó lo ordenado. Y aquí entramos en la leyenda.

El 27 de marzo tres convoyes iniciaban el peregrinaje a la frontera con Bolivia. En ésta no hubo problema con la internación de la tropa; el armamento fue entregado a las autoridades, a

excepción de las espadas de los oficiales, que, por una deferencia simbólica, fueron mantenidas hasta el fin de la retirada.

La división siguió, en ferrocarril, hasta Uyuni... mientras que una avanzada enemiga pretendía —sin éxito— la entrega de las armas, bajo custodia, en el puesto fronterizo de Posta Vieja.

De Uyuni a Jujuy la marcha se realizó en plena altiplanicie boliviana, soportando una temperatura de 10 grados sobre cero en el día y 3 grados bajo cero en la noche, por comarcas inhóspitas, despobladas, recorridas por senderos que bajan desde cerros pedregosos a valles profundos. El bagaje de veinte carretas y el ganado para la alimentación hacían más difícil la angustiosa retirada.

Los enfermos fueron numerosos después de Uyuni. El reumatismo muscular, la escarlatina y la disentería convirtieron a la columna en un verdadero "hospital ambulante", según la frase amable del doctor Mandiola.

El retraso de grupos aislados y la búsqueda de extraviados preocuparon seriamente al comando; no pocos soldados se quedarían rezagados, para siempre, en las serranías andinas.

El día 23 de abril el regimiento "Buin" celebró su aniversario en Abra-Pampa (territorio argentino), con una formación de gala y "rancho extraordinario" para su tropa. Los clarines, veteranos de cien batallas, sonaban nuevamente, llamando a apresurar el paso: ¡Chile necesitaba a sus hijos predilectos!

El 1.º de mayo llegaban a Jujuy las primeras compañías que se habían adelantado para elegir un vivac. En esta ciudad se encontraban agentes del Gobierno chileno, que entregaron calzado nuevo a

la división y dispusieron el transporte, en ferrocarril, hacia Mendoza, vía Córdoba.

El paso por la pampa argentina se efectuó sin mayores alternativas. En todas las ciudades donde existía una unidad militar, la columna —sin excepción de jerarquía— fue objeto de cálidas muestras de aprecio y admiración.

Reunidos el día 9 en Mendoza, se dispuso la última etapa de la empresa, que comprendía el paso de la cordillera, a pie y en mulas, siguiendo en lo posible el trazado del ferrocarril transandino, entonces en construcción.

La llegada a la línea demarcatoria fue celebrada con zamacuecas, brindis de alegría y, lógicamente, el Himno Nacional, entonado con acentos de emoción y coraje.

Instalada la división en la ciudad de Los Andes —donde se entregaron uniformes y armas—, luego se dirigió a Santiago, para recibir el homenaje de la ciudadanía y su ilustre mandatario.

Si algo llama a la reflexión es, sin duda, la inalterable disciplina mantenida por todos los individuos de tropa durante la gigantesca travesía. Sólo unos pocos soldados fueron ganados por la tendenciosa propaganda de los sublevados, y las faltas graves (¡sólo tres!) fueron reprimidas con justa energía.

En la tarde del 17 de mayo la guarnición de la capital —en formación de parada— rendía honores a la legendaria división, encabezada por el "Buin", mientras miles de personas daban apoteósica bienvenida a los Héroes del Deber.

Desde un balcón de La Moneda, el Presidente Balmaceda revistó a la unidad que simbolizaba, cual ninguna, la lealtad del Ejército Nacional a los patrióticos ideales del Jefe Supremo.

Otras jornadas heroicas esperaban a los vencedores de la Pampa y el Ande. Las colinas de

Concón y Placilla supieron del sacrificio del "Buin", que al desaparecer, en trágico holocausto, auguraba el final de Balmaceda y su régimen nacionalista.

Desde el 7 de marzo el crucero *Esmeralda* había iniciado el bloqueo de Antofagasta, impidiendo el desembarco de contingentes regulares. El 19 una fuerza de desembarco, compuesta de 1.400 hombres, ocupaba la ciudad pacíficamente, debido a la defección de los 210 soldados que componían la guarnición.

Sin pérdida de tiempo, la escuadra se dirigió a Arica, apoderándose de ella el 6 de abril, sin disparar un tiro, ya que había sido abandonada por la división Arrate —700 hombres—, que se retiró a Tacna. Las fuerzas "congresistas" avanzaron con ánimo de capturar la última población del extremo norte..., pero el coronel Arrate, sin comunicación con el sur y cercano a la frontera con Perú, prefirió entregar las armas a las autoridades peruanas, quedando internado en Arequipa hasta el final de la guerra.

La ocupación de Atacama figuró entre los primeros planes de la contrarrevolución. Una división de veteranos, al mando del coronel Adolfo Holley, zarpó el 18 de abril en varias naves de guerra hacia el puerto de Caldera, tomándolo sin oposición el 22 del mismo mes.

La provincia de Atacama contaba con valles fértiles, fáciles de defender, y que podían aportar alguna producción a la "economía de guerra" que forzosamente se imponía en el territorio ocupado; además está unida por buenas comunicaciones a la

República Argentina y a la provincia de Coquimbo, considerada como fuente potencial de nuevos contingentes.

La llegada de las tropas expedicionarias decidió el abandono de Copiapó por las tropas balmacedistas que la defendían. El comandante Tristán Stephan, con 600 soldados, se internó en territorio argentino, ante una orden perentoria del intendente y Comandante General de Armas, Darío Risopatrón Cañas.

El comandante Stephan llevó, en calidad de prisioneros, a los caudillos congresistas de la provincia, entre ellos a Manuel Antonio Matta, el cura Guillermo Juan Cárter, Ricardo Vallejos, Erasmo Castro, José M. Grove y otros. Las autoridades argentinas liberaron a los presos políticos, que inmediatamente marcharon al norte. La división Stephan volvió a Chile, vía Mendoza, sufriendo los rigores del invierno cordillerano. No hubo una sola deserción.

Mientras se realizaba la ocupación de la provincia, el blindado *Blanco Encalada*, al ancla en la bahía de Caldera, fue hundido en un hábil ataque, ejecutado por las torpederas *Lynch* y *Condell*, cuyos capitanes —Alberto Fuentes y Carlos Moraga— conocían perfectamente los movimientos de la escuadra a través de comunicaciones enviadas desde Santiago.

En la acción del 23 de abril perecieron 120 personas, entre otros Enrique Valdés Vergara, secretario de la Junta de Gobierno, instalada en Iquique. Ramón Barros Luco se salvó, según la leyenda, asido a la cola de un novillo, que lo arrastró a la playa.

El hecho produjo natural alegría en Santiago, ya que se pensaba que "apresuraría la paz", como públicamente lo manifestó el diputado Adolfo Ibáñez.

El Presidente Balmaceda se opuso a una cele-

bración privada que se ofrecería en La Moneda, pidiendo, por el contrario, el máximo de mesura ante una tragedia en que "las únicas víctimas han sido chilenos".

A fines de abril había cuatro provincias en manos del Congreso y la escuadra sublevada: Tacna, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

El día 12 de abril se acordó constituir un Gobierno "provisorio" en Iquique, con el fin de dar una fachada institucional al golpe y organizar una "administración" que pusiera fin al desorden y la carestía.

El organismo máximo de poder fue la Junta de Gobierno, presidida, simbólicamente, por Jorge Montt; actuaban junto a él Ramón Barros Luco y Waldo Silva. En la secretaría fue designado Enrique Valdés Vergara.

Las labores de la Junta estaban auxiliadas por cuatro secretarías del despacho: Interior y Obras Públicas, que quedó vacante, ya que su titular Manuel A. Matta se encontraba en Copiapó; Relaciones Exteriores, Justicia, Culto e Instrucción Pública fue confiada a Isidoro Errázuriz; Hacienda, en manos de Joaquín Walker Martínez, llegado en esos días en el transporte *Maipo*; Guerra y Marina fue entregada al coronel Adolfo Holley.

La primera medida de este extraño "Gobierno exiliado sin exilio", fue la impresión de un Boletín Oficial; en su primer número, a falta de leyes o decretos, se publicó el Acta de Deposición del Presidente Balmaceda.

La Junta sesionaba en una casa de la calle Baquedano que —obviamente— bautizaron La Monedita.

Una de las grandes dificultades que afrontaba la Junta era la falta de circulante. El mediano y

pequeño comercio acuñaron vales metálicos para sus ventas cotidianas, pero, temiendo abusos y falsificaciones, se emitieron vales con el membrete de la Municipalidad de Iquique, que fueron aceptados como moneda corriente.

No se crearon símbolos especiales para identificar el movimiento ante el exterior. La escuadra usaba una banderola azul con un rectángulo blanco en el fondo, y las fuerzas de tierra, un brazalete rojo. Los colores nacionales jamás se usaron oficialmente (¿pudor?).

La escarapela lacre fue usada profusamente en la capital y provincias por los partidarios del movimiento. Las jovencitas santiaguinas lucían, en los salones, enormes adornos de ese color. Los obreros municipales colocaban igual distintivo a las mulas del aseo.

La Junta de Iquique decidió crear una red de agentes en el exterior, con la doble finalidad de entrabar la diplomacia oficial y conseguir las armas para consumar el golpe de fuerza que derribaría al Gobierno. Los primeros agentes confidenciales se destacaron en los países limítrofes, por simple estrategia diplomática. En Bolivia se designó a Gonzalo Matta; en el Perú, a Javier Vial Solar, y en Argentina, a Adolfo Guerrero. Las gestiones de Matta ante el Presidente Arze lograron que éste reconociera la "beligerancia" de los contrarrevolucionarios.

Sin duda, las piezas maestras del menguado cuerpo diplomático fueron los agentes destacados en Europa: el influyente banquero Agustín Ross, en Inglaterra, y Augusto Matte, en Francia. El primero tuvo como misión principal el envío de armas, municiones y vituallas para el "ejército" que se organizaba en el norte. Por su mediación se enviaron fondos a Ricardo Trumbull, agente en los Estados Unidos, para la compra de armamentos.

Esta operación comercial significó un rotundo fracaso para la Junta y demostró la habilidad diplomática del Gobierno norteamericano, francamente favorable a la causa balmacedista. La posibilidad de una derrota "congresista" y, por ende, del capitalismo inglés, figuraba ya en la agenda de Washington.

Las armas fueron embarcadas en el *Itata*, a pesar de una orden de detención expedida en San Diego (California) y gestionada por Prudencio Lazcano, representante de La Moneda. El mercante llegó el 3 de junio a Tocopilla. El Gobierno norteamericano consideró esto como una "vejación"; exigió explicaciones a la Junta y ordenó la vuelta del *Itata*, escoltado por el *Charleston*, barco de guerra que se encontraba entonces en aguas chilenas.

Otro envío de armas, desde Europa, llegó sin novedad a Iquique, en las bodegas del *Maipo*, que las había recibido, en Tierra del Fuego, desde la barca *Wandle*.

Entretanto, Augusto Matte trataba ante el Gobierno francés el secuestro de los cruceros *Errázuriz* y *Pinto*, que Balmaceda había ordenado construir en astilleros del Mediterráneo. Los esfuerzos del banquero Matte y una bien organizada campaña de prensa dilataron indefinidamente la partida de las naves, ante la desesperación de La Moneda, que confiaba en su posesión para lograr un triunfo fácil sobre la escuadra sublevada. El zarpe fue autorizado al fin para comienzos de agosto, cuando en el norte se preparaba, febrilmente, la expedición al centro del país.

En los días de las batallas decisivas, los Presidentes, como popularmente se les llamaba, estaban anclados en el puerto de Buenos Aires.

Como señalamos antes, la prensa opositora fue suprimida drásticamente, ante la insolencia e impudicia que desplegó el 1.º de enero. Reducida a la clandestinidad, atacó en forma implacable al Gobierno y a sus hombres más representativos, con los epítetos más hirientes y absurdos. Las damas de la "sociedad" santiaguina se encargaban de la distribución de las hojas que, diariamente, entregaban su mensaje de odio y mentiras a la población. Los nombres eran muy bien escogidos y uniformes en su significado: *El Revolucionario, El Congresista, El Constitucional, La Constitución, La Justicia, El Republicano, La Revolución, El Amigo del Pueblo.* Claro está, había dos títulos muy sugestivos: *La Revancha* y *La Horca.*

El Gobierno dio a publicidad dos libelos de aparición periódica y que circulaban casi exclusivamente en los cuarteles: *El Recluta* y *Aristocracia.*

El día 14 de mayo llegaba a Iquique el teniente coronel Emilio Körner, que había embarcado secretamente el 4 en la bahía de Valparaíso. Como señalamos en páginas anteriores, el militar alemán fue contratado por el Gobierno de Santa María para desempeñar la docencia en algunos institutos del Ejército.

Körner casó en Chile, emparentándose con el millonario Francisco Puelma, decidido opositor a Balmaceda. Su permanencia en el norte fue de gran valor para la contrarrevolución, preparando los cuadros de oficiales que combatirían, más tarde, al Gobierno que le había confiado, con lealtad, la preparación de sus soldados.

La presencia de Körner en las filas opositoras se investiga actualmente en forma minuciosa. No es aventurado suponer su desempeño como agente

alemán, dados los intereses que muchos súbditos de esa nacionalidad mantenían en Chile.

Es posible, también, que Berlín previera la derrota de la política nacionalista de Balmaceda y una eventual "exportación" de sus capitales a la industria salitrera.

La situación del Poder Legislativo llegó a preocupar seriamente al Gobierno, ya que éste, desde el instante de su autodisolución, había dejado, de hecho, la suma de los poderes públicos en manos de un Ejecutivo que aparecía omnipotente e ilegal.

Balmaceda, como era lógico, no consideró que el 1.º de junio terminaba el mandato del antiguo Congreso y mediante decreto del 11 de febrero convocó a elecciones de Cámaras Constituyentes para el último domingo de marzo, debiendo éstas sesionar desde el 20 de abril.

Las elecciones de constituyentes se efectuaron el 29 de marzo, siendo elegidos todos los candidatos oficiales sin oposición.

El nuevo Congreso aprobó las leyes y decretos expedidos desde el 1.º de enero, por unanimidad. Curiosamente, las incompatibilidades con cargos públicos fueron abolidas, siendo elegidos empleados administrativos, contratistas fiscales e incluso militares. El general José Velásquez, jefe de Estado Mayor, fue elegido senador; igual cargo ocuparon Orozimbo Barbosa, Comandante General de Armas de Santiago, y el general José Gana Castro, Ministro de Guerra y Comandante en Jefe del Ejército.

El juez Domingo Godoy, Ministro de Relaciones Exteriores de Balmaceda, ha sido señalado, con

majadera insistencia, como el "verdadero dictador" y el "genio infernal" de su Gobierno. Este juicio simplista corresponde a historiadores liberales, deseosos de justificar la masacre de 10 mil chilenos, en una lucha insensata y absurda, desatada por una oligarquía soberbia y egoísta.

La censura oficial, los arrestos y las supuestas torturas no tuvieron otra repercusión que aquella dada por la prensa clandestina. La pena de azotes —que conmovía a las almas sensibles— era castigo cotidiano en los cuarteles militares. En la década del 40 (¡50 años después!) fuimos testigos presenciales de su aplicación en una unidad provinciana.

La actuación del ministro Godoy no fue más dura que la de los jueces "congresistas" después del triunfo de la contrarrevolución. Los saqueos y las persecuciones dieron la tónica de la "justicia revolucionaria".

El historiador Ricardo Salas Edwards —con cierta candidez— pone en boca de Godoy estas frases "terribles" cuando emite un juicio sobre los opositores: "¡Oh!, ¿qué me importa? Arrollaré a todos esos elementos y los pondré en fuga, sin usar más que las dragonas de los sables" (sic).

El mes de agosto anunciaba grandes acontecimientos para Chile. La Junta de Iquique consideraba que sus tropas podían desembarcar en el centro del país, para luego, audazmente, marchar a la capital y tomarla por asalto, si fuese necesario.

El Comité Revolucionario de Santiago recibió órdenes precisas para intensificar el sabotaje en todo el territorio que, eventualmente, sería el campo de la batalla que se aproximaba.

En los meses precedentes se había sentenciado a varios montoneros, sorprendidos en la destruc-

ción de puentes, líneas telegráficas, túneles o en intentos más serios.

El día 12 de julio de 1891 era fusilado en la plazuela de la cárcel de Valparaíso el comerciante Ricardo Cumming y dos de sus cómplices, sorprendidos en un burdo complot para volar las torpederas *Condell* y *Lynch*.

Desde algunos días antes del 19 de agosto, el Gobierno detectó movimientos sospechosos en el fundo Lo Cañas, propiedad de Carlos Walker Martínez. Luego se confirmó la organización de una montonera, compuesta de numerosos jóvenes de la "alta sociedad" santiaguina, y cuya finalidad era la destrucción de ferrocarriles y telégrafos, para aislar a la capital.

Al amanecer del día 19, la montonera fue sorprendida por tropas regulares, y atacada con fuego de revólveres y rifles. Varios muertos y numerosos heridos fue el saldo de la refriega. Los sobrevivientes fueron juzgados por un tribunal militar y condenados a muerte.[20]

La expedición de los "congresistas" al sur llegó a ser un secreto a voces en las esferas de gobierno, al punto que se ordenó el patrullaje de la costa comprendida entre Quintero y el sur de Valparaíso.

El Estado Mayor ordenó el estado de alerta y la movilización de las guarniciones de Santiago, Valparaíso y Concepción.

El 20 de julio un convoy marítimo zarpaba desde Iquique rumbo a Caldera, conduciendo a su bordo al Cuartel General del Ejército, Estado Mayor General y varios regimientos, organizados con

[20]El total de muertos se calcula en 33; fusilados, sólo 8.

evadidos de la "dictadura" y obreros de la pampa a quienes se había prometido dinero y pasajes para volver a sus lugares de trabajo.

Más tarde llegarán a Caldera las tropas acantonadas en Antofagasta. Luego de muchas discusiones se eligió la bahía de Quintero como punto de desembarco.

El 19 de agosto, a mediodía, se reunían frente a la playa elegida la escuadra y los transportes. El desembarco se inició a las 9 de la noche y continuó hasta el amanecer.

Al alba del 20 la división de Santiago recibió la orden de dirigirse a Valparaíso y ocupar las colinas de Concón.

Según Julio Bañados Espinosa, las fuerzas del Gobierno sumaban 6.307 hombres. Estas estaban bajo el mando de los generales Orozimbo Barbosa y José Miguel Alcérreca.

El día 21 se empeñó la batalla en las alturas de Concón, batidas continuamente por el fuego de la escuadra. La confrontación terminó a las 4 de la tarde con la derrota de las tropas balmacedistas.

El ejército "constitucional" emprendió la marcha a Quilpué, el día 24, para descansar y atender a los heridos. El plan trazado consultaba un ataque por sorpresa a Valparaíso, tratando de aislar la ciudad y, desde allí, "imponer condiciones" al Gobierno de Balmaceda.

Un segundo encuentro tuvo lugar en las alturas de Placilla, significando una nueva y definitiva derrota para el ejército nacional.

La venganza de los "defensores de la Constitución" comenzó en el mismo campo de batalla: los generales Barbosa y Alcérreca fueron asesinados a mansalva por los vencedores de la jornada, y expuestos a la curiosidad de la soldadesca.

En horas de la noche, ambos héroes de la pacificación de la Araucanía y la Guerra del Pacífico entraban a Valparaíso en un carretón de la basura.

La derrota de Placilla significaba para el Presidente Balmaceda el fin de su régimen nacionalista y la pérdida definitiva del poder.

La noche del día 28 se refugió en la Legación argentina, entregando el mando al general Manuel Baquedano, que, dicho sea de paso, no tuvo la autoridad ni la energía suficientes para evitar los vergonzosos saqueos que metódicamente realizaron las turbas de la capital, dirigidas por algunos "caballeros" de la oposición.

Mientras tanto el Presidente Balmaceda, abatido e informado de las persecuciones que el nuevo Gobierno hacía en las personas de sus antiguos amigos y compañeros, tomó una decisión drástica.

Sus últimas horas estuvieron ocupadas en la redacción de algunas cartas a sus amigos y lo que se ha dado en llamar su *Testamento Político.*

El día 18 de septiembre, el ministro argentino Uriburu inició gestiones para definir la situación del mandatario. Las autoridades "revolucionarias" pidieron su entrega para juzgarle. Mientras tanto debía ser conducido a la Penitenciaría como un delincuente habitual.

El Presidente Balmaceda escuchó con tranquilidad el informe que le dio Uriburu. En el instante de la despedida le dijo: "Es necesario morir. Ruégole entregar estas cartas a las personas a que van destinadas". Esa noche terminaba su mandato constitucional.

A las 8 de la mañana, una detonación se escuchó en las habitaciones interiores de la Legación. El Presidente Balmaceda ponía fin a sus días.

Era el 19 de septiembre de 1891.

Documentos de La Epoca

CUECA A BALMACEDA

Mi vida, gloria eterna al gran patriota,
mi vida, víctima de una traición,
mi vida, al ilustre Balmaceda,
mi vida, por su noble corazón,
mi vida, gloria eterna al gran patriota.

Es imposible que haya,
mi vida, alguien que pueda
igualar en sus hechos,
mi vida, a Balmaceda.
Es imposible que haya,
mi vida, alguien que pueda,
a Balmaceda sí
siempre la Historia
recordará sus hechos,
mi vida, y su memoria.

Yo seré toda la vida,
mi vida, balmacedista.[21]

---

[21]Cueca popular durante la guerra civil de 1891. Recopilada por el Conjunto Cuncumén en el valle de Elqui.

BALMACEDA
(Leyendas de mañana)

En un miserable rancho,
en una tarde de invierno,
un padre a su hijo relata
las historias de otros tiempos.
Afuera la lluvia cae,
en las ramas ruge el viento
i el relámpago se enciende
entre las nubes del cielo.
—Hubo —le dice el anciano
a su hijo, que escucha atento—
hace años un Presidente
que fué el amigo del pueblo.
Un hombre justo i honrado,
i de un corazón tan bueno
que fué su muerte desgracia
para todos los chilenos.
Yo que me inclino a la tumba
i tengo blanco el cabello,
yo, que no espero en el mundo
i sólo en el cielo espero,
cada vez que en mi memoria
se presenta su recuerdo,
siento lágrimas que caen
de mis ojos para el muerto.
Me parece que lo miro
en mis visiones de viejo,
cuando mi vela se apaga
i huye de mi lado el sueño.
Era un hombre de alta talla,
que usaba largo el cabello,
i tenía de esas frentes
en que se refleja el cielo.
De esas frentes, tú lo sabes,
en que parece que adentro
debe haber un sacerdote
que dice misa en un templo.

Su mirada cariñosa
i sus modales correctos,
lo cortés de su palabra
i lo suave de su acento,
hacían que en todas partes
todo hombre, grande o pequeño,
le diera mano de amigo
i le ofreciera su afecto.
Sólo en ciertas ocasiones,
con ademán altanero,
dejaba oír en sus labios
la voz que parece un trueno:
¡Cuando de pié en la tribuna
defendía los derechos
i pedía libertades
en beneficio del pueblo!
Entonces era de verle;
¡me parece que le veo
como un dios que está enojado
con algo que estorba al cielo!
Su mirada se encendía,
se enronquecía su acento
i gobernaba las masas
con su palabra de fuego.
No hai en Chile un Presidente
que haya subido a su puesto
más libremente elegido
ni con mejores derechos.
El fué quien hizo las obras
que ves a cada momento:
ese canal del Mapocho,
i el viaducto del Malleco.
E hizo construir escuelas,
pues quiso que los chilenos
conocieran sus deberes
i supieran ejercerlos.
I en medio de tantos gastos,
disminuyó los impuestos,
porque él sabía que al pobre

le cuesta ganar dinero.
Mas, tú sabes, hijo mío,
que todos los seres buenos
tienen muchos envidiosos
ocupados en perderlos.
En contra del Presidente,
un día siete de enero,
hicieron una revuelta
todos los hombres perversos.
Como ellos tenían plata
i había muchos banqueros,
se compraron a la escuadra
y a oficiales del Ejército.
Tú no puedes figurarte,
eres aún muy pequeño,
cómo hai hombres que se venden
por un poco de dinero.
Este mundo que vivimos
de miserias está lleno,
i hai miserables que tienen
de lodo el alma i el cuerpo.
Mientras te digo estas cosas,
yo —sin querer— me avergüenzo...
¡Quisiera olvidar yo mismo
los crímenes que te cuento!
Pero es preciso que aprendas
las historias de aquel tiempo
i que bendigas el nombre
de los que han amado al pueblo.
En aquella lucha impía
del cielo contra el infierno,
fué vencido el Presidente
con la traición i el cohecho.
I los revolucionarios,
una vez que así vencieron,
llevaron por todas partes
el pillaje i el incendio.
Los fieles al Presidente
fueron perseguidos, presos,

gran número desterrados
y alevosamente muertos.
En todo el país oyóse
un solo y triste lamento.
¡Yo tengo desde aquel día
ganas de no ser chileno!...
I cuentan las tradiciones,
tradiciones de mi tiempo,
que allí donde estaba oculto
tuvo el Presidente un sueño.
Vió que la Patria venía
toda vestida de duelo
sin laureles en la frente
i sin armadura el pecho.
I que le dijo llorando:
—Presidente, ya no tengo
ni fulgores en mi estrella,
ni sacerdote en mi templo.
¡Tú que has hecho por mi gloria
lo que jamás nadie ha hecho
i me has dado de tu vida
el jigante i noble esfuerzo,
tú sólo puedes salvarme,
tú sólo en este momento
puedes hacer que detengan
sus crímenes los perversos!
—¿Qué quieres que haga? —le dijo
el Presidente—, no tengo
sino la vida; si quieres
yo te la daré contento.
—¡Tu vida! —dijo la Patria—,
pues es eso lo que quiero.
Con tu muerte, el enemigo
se quedará satisfecho,
i salvarás de este modo
a todos tus compañeros,
que son mis únicos hijos,
nobles, patriotas y buenos!
Entonces el Presidente,
levantándose en su lecho,

—Patria —le dijo—, ¡tú sabes
que es tuyo mi ser entero!
Si crees que con mi muerte
salvar a tus hijos puedo
de los crímenes i males
que están ahora sufriendo,
i los torpes enemigos
que producen tu tormento
con mi muerte quedarían
tranquilos i satisfechos,
¡oh Patria, dame tus brazos,
porque yo probarte quiero
que, vivo, te he engrandecido
i voi a salvarte, muerto!
I tomando su revólver
con pulso firme y sereno,
se dió un balazo en las sienes
diciendo: —¡Muero contento!

oOo

Se quedó mudo el anciano;
el hijo se queda atento.
Afuera cae la lluvia
i se oye la voz del trueno.
—Padre mío —dice el hijo—,
el nombre saber yo quiero
de ese hombre de que has hablado,
que fué el amigo del pueblo.
¡Yo quiero pasar mi vida
bendiciendo su recuerdo!—
I levantando la frente,
—¡BALMACEDA! —dijo el viejo.[22]

MATÍAS.

Agosto, 1892.

---

[22]Bajo el seudónimo señalado, esta composición fue incluida en la obra *José Manuel Balmaceda, el último de los Presidentes constitucionales de Chile*, de Joaquín Villarino, en su segunda edición, Barcelona, 1893.

LA HORA DECISIVA

¡Pueblo! ¡Ejército!
De vuestro patriotismo, de vuestra lealtad, depende que al fin en Chile tengamos gobierno republicano o que continuemos uncidos al carro de los banqueros y ajiotistas, nuestros verdugos de tres cuartos de siglo.

En siete largos meses de revolución, de guerra fratricida hecha por la aristocracia, no en defensa de vuestros derechos i libertades, sino en defensa de la bolsa de los millonarios, vosotros los pobres habéis sido los únicos que habéis sufrido sus tremendas consecuencias.

Los ricos se han ido al Norte i, secundados por los traidores de la escuadra, se han apoderado de sus aduanas, i han saqueado el tesoro nacional.
Esos canallas de levita, no pudiendo beberos vuestro sudor i vuestra sangre en la infame esplotación de vuestro honrado trabajo, han robado las riquezas de Tarapacá, que vosotros conquistasteis con el esfuerzo de vuestro brazo i el heroísmo de vuestro corazón; han incendiado vuestros hogares en Iquique, Pisagua, Antofagasta i Taltal; han violado vuestras mujeres y vuestras hijas; han descuartizado i mutilado a vuestros jefes i compañeros

en las ambulancias, i han llevado el luto, el dolor i la miseria al seno de vuestras familias.

I hoi, que se ven amenazados de muerte con la próxima llegada de las naves de guerra que el Gobierno ha encargado a Europa, en medio de su agonía i desesperación, intentan repetir en la capital sus tropelías i crímenes del Norte, acaso porque todavía sueñan con seduciros con el brillo de su oro i con doblegar vuestra altivez i patriotismo. . .

Nos amenazan con un golpe dado en la capital de la República. Que lo den los aristócratas millonarios, que lo dé la juventud dorada de Santiago. Pero que tiemblen por sus palacios, reducidos a ceniza por la justa cólera popular, i que tiemblen por sus mujeres e hijas, pasto de las lujurias de nuestros compañeros de armas.

Si llegaran a tener el coraje de levantar bandera aquí en la capital, no quedaría cabeza de noble sobre sus hombros, pues los aristócratas pagarían mui caro su carnicería de Pozo Almonte i todos sus latrocinios i crímenes de ochenta años.

¡Pueblo!, vengad a vuestros hermanos, hambreados por la orgullosa aristocracia.

¡Ciudadanos!, al puesto del deber, al lado de vuestros amigos del ejército del orden, a vengar las estafas i las afrentas de tres cuartos de siglo.

¡Mueran los aristócratas millonarios![23]

[23]Llamado aparecido en el número 66 (15 de agosto de 1891) de *El Recluta*, impreso que circulaba en los cuarteles balmacedistas. Figura en las *Memorias* de Fanor Velasco, Santiago, 1914.

EPILOGO

En nuestra Historia existen figuras cuya presencia es dominante por la permanencia de su genio y el valor humano que de ellas emana.

Balmaceda se levanta como una voluntad que comprende claramente los intereses en juego dentro del escenario nacional, intuye la suma de factores que operan favorablemente para imprimir un nuevo rumbo a los destinos de Chile y mantiene lealtad sin límite al objetivo que lo guía: hacer de su país una potencia industrial y militar.

Jamás ningún gobierno de la República ha realizado proyectos tan vastos como los que puso en práctica Balmaceda; un dinamismo sin precedentes ponía en actividad los recursos del Estado; un aliento renovador sacudía a la nación entera, impulsando enérgicamente su progreso.

La influencia británica se cernía amenazante no sólo sobre el salitre, sino también en varias actividades marginales que servirían de pivote para asaltar el cuerpo económico de Chile. Balmaceda astutamente adopta una conducta antiinglesa, aun-

que no declarada: en 1889 solicita y obtiene un préstamo en Berlín; se encarga a la firma francesa Forges et Chantiers de la Méditerranée la construcción de los acorazados *Presidente Pinto* y *Presidente Errázuriz*; se contratan misiones pedagógicas francesas y alemanas que organizan metódicamente el sistema educativo nacional; algunas empresas norteamericanas y francesas son favorecidas con contratos para realizar diversas obras públicas; se compra material bélico en Alemania (material Krupp y Schneider) y se contrata una misión que "prusianiza", hasta el detalle, a nuestras Fuerzas Armadas; finalmente, un juicio formal termina con el monopolio del transporte que detentaba la compañía británica del Ferrocarril Salitrero de Tarapacá.

Frente a la revolución que iniciaba Balmaceda, el imperialismo inglés comienza a instrumentalizar la contrarrevolución con medios tradicionales aunque efectivos: se prostituye a la prensa, se compran conciencias y se soborna a políticos mediocres y serviles. Julio Zegers, Eulogio Altamirano, Carlos Walker Martínez, Ramón Barros Luco, Waldo Silva y otros serían los tramoyistas del drama antinacional. Pocos meses bastaron para polarizar a la comunidad: junto a Balmaceda estuvo la burguesía industrial, nacida al calor de las fundiciones coquimbanas, y la clase media tradicional, de extracción provinciana. La adhesión al ideario del mandatario la hace aparecer como un estrato democrático en promoción de nuevas oportunidades sociales, que su cultura y mentalidad exigían imperativamente. La oligarquía terrateniente y la

minoría bancaria se refugiaron en la entelequia parlamentaria y la maraña constitucional para disimular una lucha que importaba su sobrevivencia como clase.

Utilizando a la Armada como fuerza de choque y las aduanas salitreras como fuente de recursos, ahogan en sangre la dinámica nacionalista, sellando nuestro trauma histórico con 10 mil muertos.

A Balmaceda se le ha negado un título legítimo: Caudillo. Un caudillo con ideas, pero sin pueblo. La síntesis social, en la cual se apoyó, fue heterogénea y sin esa solidez que la capacita para actuar como fuerza elemental de un proceso revolucionario. Desprovisto de una ideología coherente, encontró en un "pragmatismo nacional" la simetría doctrinaria que iba a cimentar su obra. Sus enemigos lo acusaron de buscar el caudillaje, cuando su error fue precisamente no haberlo ejercido.

Paradojalmente, será un conductor después de su sacrificio. Su carisma renacerá desde la tumba. Un juego trágico lo hizo caudillo ausente: se examinó y comprendió su ideario y —destino mezquino— nació un Partido Balmacedista. Pero era un esfuerzo postrero, un afán derrotado de antemano. El credo nacionalista necesitaba de un creador y un ejecutor. Y éste ya se había consumido en la pasión y el ideal.

Para Balmaceda la Patria era una compulsión heroica. La abstracción de un Ejecutivo fuerte y la visión cegadora de la grandeza nacional se vacia-

ron en el molde de su existencia formal y el horizonte del romanticismo místico. Fracasado en su empeño, busca un fin patético y lógico: el suicidio. La oligarquía prefiere convertirlo en una superstición de consumo colectivo.

La personalidad avasallante no se agota en la muerte. El mito la trasciende en el tiempo, como el artífice que enseña a sus hijos el uso del cincel. Insuficientes y menguadas serán siempre las explicaciones de su lucha y su frustración. La autoeliminación es, a fin de cuentas, un intento de explicación. Irracional y morbosa, quizás, pero a la altura de su ejecutor. Mientras existan las condiciones de la antipatria y una tarea nacional, Balmaceda será una promesa incumplida, un Héroe Ausente, que estará con nosotros en cada batalla que se empeñe por la soberanía y la dignidad de Chile. Cuando rescatemos el último rincón de territorio de manos extrañas, entonces seremos dignos de repetir su frase inmortal:

No tengo más interés que por lo justo
ni más amor que por lo bueno
ni más pasión que por la Patria

Indice

	Pág.
PROLOGO	5
I	9
II	21
III	47
IV	69
DOCUMENTOS DE LA EPOCA	91
Cueca a Balmaceda	93
Balmaceda (Leyendas de mañana)	94
La hora decisiva	99
EPILOGO	101

Este libro se terminó de imprimir en los talleres de la
EMPRESA EDITORA NACIONAL QUIMANTU LTDA.,
Bellavista 0153, en el mes de diciembre de 1972.
Edición de 10.000 ejemplares.
Hecho en Chile - Printed in Chile.

Con este libro iniciamos una nueva serie de la Colección Camino Abierto; la Serie NUESTRA HISTORIA.

Es nuestro deseo entregar a todo el pueblo la Historia, sin agregados ni deformaciones.

Durante años la clase dominante publicó lo que más le convenía; ocultó aquellos próceres que más le molestaron, deformó otros y ensalzó a quienes quiso.

Hoy QUIMANTU sólo busca desmistificar la Historia, destacando sus verdaderos actores.

Serie **NUESTRA HISTORIA**

colección camino abierto

1. "El Héroe Ausente," J. Núñez Pinto.
2. "Capítulos de la Historia de Chile", Ranquil.